



Universidad
de Alcalá

DERECHO PENAL MILITAR Y PRISIONES MILITARES

MILITARY CRIMINAL LAW AND MILITARY PRISONS

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D^a. ALBA MARÍA SANZ HARO

Dirigido por:

Prof Dr. D. CARLOS GARCÍA VALDÉS

Alcalá de Henares, a 21 de enero de 2019



TRIBUNAL DE CALIFICACIÓN

Presidente/a:

Vocal:

Secretario/a:

Suplente:

Calificación:

Fecha:

RESUMEN

El trabajo ante el que nos encontramos tiene como finalidad sumergirnos en el Derecho Penal Militar de España. Para ello, es necesaria una pequeña introducción histórica, continuando con el Derecho Procesal Militar, el Código Penal, las sanciones disciplinarias, Derecho Penitenciario Militar y, por último estableciendo la relación entre la Administración Penitenciaria y el sujeto penado.

Notable importancia supone la mención a la jurisdicción castrense en nuestra Constitución, al igual que la necesaria condición de militar en los delitos del ámbito castrense, la competencia en tiempos de paz y en tiempos de guerra, el régimen y el tratamiento en prisión, y, la premisa básica de disciplina, jerarquía y cohesión en las Fuerzas Armadas.

Finalmente, todo en conjunto nos permitirá conocer esta jurisdicción tan desconocida en las Universidades Españolas y en el día a día de un civil.

ABSTRACT

The present project we are working on is aimed at immersing ourselves in the Spanish Military Criminal Law. Therefore, an analysis will be made on the historical introduction, continuing with the Military Procedural Law, the Penal Code, disciplinary sanctions, Military Penitentiary Law, and finally establishing the relationship between the Penitentiary Administration and the subject punished.

Remarkably important is mentioning the military jurisdiction in our Constitution, as well as the necessary military status in military crimes, competition in times of peace and in times of war, regime and treatment in prison, and the basic premise of discipline, hierarchy, and cohesion in the Armed Forces.

Finally, everything together will allow Spanish universities and citizens to understand the components of this jurisdiction.

PALABRAS CLAVE

Historia militar

Derecho Militar

Delito

Derecho Penal Militar

Derecho Penitenciario Militar

Derecho Procesal Militar

Prisiones militares

Relación Jurídica

KEY WORDS

Military history

Military law

Offence

Military Criminal Law

Military Prison Law

Military Procedural Law

Military Prisons

Legal relationship

Índice

RESUMEN.....	2
ABSTRACT	3
PALABRAS CLAVE.....	4
KEY WORDS	5
ABREVIATURAS	9
INTRODUCCIÓN	10
I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA	11
II. DERECHO PROCESAL MILITAR.....	14
1. La jurisdicción militar en el artículo 117.5 de la Constitución	14
2. “Ámbito estrictamente castrense”	15
3. Independencia judicial.....	16
4. Derecho de defensa	17
5. Representación procesal	19
6. Competencia de la jurisdicción militar.....	19
7. Estructura de la Jurisdicción Militar	20
8. Cuestiones de competencia	25
9. Gratuidad de la justicia en el ámbito castrense	26
10. Actos procesales.....	26
11. Medidas cautelares sobre personas.....	27
11.1 Citación	27
11.2 Detención	27
11.3 Prisión preventiva.....	28
11.4 Prisión incomunicada	29
11.5 Prisión atenuada	30
12. Libertad provisional	30
13. Procedimientos	31
13.1 Procedimiento preliminar (Diligencias previas).....	31
13.2 Diligencias preparatorias	32
13.3 Sumario ordinario.....	34
13.4 Otros procedimientos	37
14. El juicio oral y la sentencia	38

III. CÓDIGO PENAL MILITAR.....	40
1. Parte general.....	40
1.1 Aplicación del Código Militar.....	40
1.2 Definiciones	41
1.3 Delito militar	42
1.4 Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.....	43
1.5 Penas militares.....	44
1.6 Penas accesorias	47
1.7 Cumplimiento de las penas	47
2. Parte especial.....	47
2.1 Delitos contra la seguridad y defensa nacionales (arts 24 a 37).....	48
2.2 Delitos contra la disciplina (arts 38 a 48).....	48
2.3 Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares (art 49 y 50).....	49
2.4 Delitos contra los deberes del servicio (arts 51 a 80).....	49
2.5 Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar (arts 81 a 85)	50
IV. DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR	50
V. DERECHO PENITENCIARIO MILITAR.....	52
1. Contenido de la actividad tratamental	52
1.1 Separación y clasificación	52
1.2 El tratamiento	55
2. Contenido de la actividad regimental	57
2.1 Actuaciones iniciales.....	57
2.2 Tiempo y lugar	58
2.3 Comunicaciones, visitas y recepción de paquetes.....	58
2.4 Régimen disciplinario y recompensas.....	59
2.5 Situaciones anómalas	60
2.6 Actuaciones finales	61
3. El trabajo	62
4. Los permisos de salida	63
5. Beneficios penitenciarios militares	64
5.1 El beneficio penitenciario del art 51 del RPM	64
5.2 El indulto particular.....	65
6. La libertad condicional.....	65
7. Derecho a la información, quejas y recursos.....	66
8. El Juez Togado Militar Territorial en funciones de vigilancia penitenciaria	66

VI.	LA RELACIÓN JURÍDICO PENITENCIARIA MILITAR	67
VII.	CONCLUSIONES	69
VIII.	BIBLIOGRAFÍA.....	72
	Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.....	72
IX.	ANEXO JURISPRUDENCIAL	74

ABREVIATURAS

ART	Artículo
ATC	Auto del Tribunal Constitucional
CE	Constitución Española
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CP	Código Penal
CPM	Código Penal Militar
EPM	Establecimiento Penitenciario Militar
FFAA	Fuerzas Armadas
JVP	Juez de Vigilancia Penitenciaria
LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LOCOJM	Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LPM	Ley Procesal Militar
RP	Reglamento Penitenciario
RPM	Reglamento Penitenciario Militar
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo

INTRODUCCIÓN

La realización de este Trabajo de Fin de Máster es el último peldaño para acceder a la Abogacía, sin olvidarnos de nuestro examen de Acceso para poder ejercer como abogados, que se realiza tras nuestro último paso por la Universidad.

Este trabajo supone la plasmación de los conocimientos adquiridos y, en el presente caso, la adquisición de nuevos por el tema que tratamos. La jurisdicción militar suele ser desconocida tanto para la mayoría de los ciudadanos como para los alumnos de Derecho. Normalmente ostentan dicho conocimiento únicamente aquéllos que se dedican al ámbito militar, y que, por lo tanto, están especializados en ello.

Resulta ameno abordar esta disciplina, partiendo desde el inicio de la misma, igualmente resulta llamativa para poner en claro e investigar sobre este tema tan concreto y delimitado de la esfera jurídica.

Además, es importante conocer esta materia para profundizar sobre los distintos ámbitos del derecho y, adquiere elevada importancia en su contenido para los que se dedican a la defensa y seguridad, especialmente las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil, y en su caso, los expertos en la materia.

De igual forma, adquiere notable importancia el Derecho Procesal Militar, pues para nuestra profesión es indispensable el conocimiento real del mismo para poder ejercer excelentemente en este ámbito.

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La jurisdicción militar surge con la creación de los ejércitos, en una época en que los ejércitos no eran profesionales, pero sí muy importantes para la defensa de las entidades políticas. Si bien, lo cierto es que nuestra legislación histórica contenía normas con anterioridad propias de la jurisdicción militar¹. La finalidad era mantener y establecer disciplina entre los soldados para asegurar la obediencia al mando, y con ello realzar la jerarquía, unidad de acción y cohesión del ejército.

La disciplina, de gran importancia en épocas pasadas como en la actualidad, garantiza el funcionamiento de los ejércitos de manera eficaz, y por ello es considerada como un bien jurídico militar fundamental, que se encuentra presente en el desvalor de la acción de la mayoría de los delitos militares y que encontramos en la actualidad en toda la normativa jurídico penal militar.

La justicia militar se caracterizó por tener carácter extra-judicial al construirse sobre el principio “*quien manda debe juzgar*”, como se refleja en las Ordenanzas de Flandes de 1701, de inspiración francesa. Dicha justicia se impartía desde el interior del ejército por parte de los militares, proporcionando así respuestas rápidas y concretas a los conflictos.

Como característica propia del ámbito castrense encontramos el intenso rigor punitivo y la aplicación de penas ejemplarizantes, incluida la pena de muerte y la cadena perpetua, aspecto que puede considerarse un antecedente de la actual focalización de las penas militares en la búsqueda de prevención general sobre cualquier otra finalidad de la pena.

A lo largo de los siglos, la jurisdicción militar se va consolidando y fortaleciendo hasta que va alcanzando el conocimiento de asuntos de todo tipo que atañen al ejército, independientemente de cuál sea su naturaleza (penal, administrativa o civil), como se deriva del modelo de justicia militar regulado en las Reales Ordenanzas de Carlos III o en la Novísima Recopilación, a partir del siglo XIX comienza un proceso de reducción competencial progresivo, paralelo al modelo de Estado en que se ubica. El

¹ A finales del siglo XV comienzan a promulgarse las primeras ordenanzas militares, modelo normativo característico del Derecho militar histórico español, que regirían la justicia militar hasta prácticamente finales del siglo XIX.

reconocimiento de unidad jurisdiccional y del derecho al juez predeterminado por la ley en los textos constitucionales decimonónicos supone un punto de inflexión que obliga a redefinir el alcance de la jurisdicción militar, originando una discusión en torno a sus límites constitucionales que todavía subsiste actualmente.

El Decreto-ley de Unificación de Fueros de 1868 redujo la competencia de la jurisdicción militar convertida en un fuero personal, y la normativa aprobada durante la II República, que tendían a restringir el ámbito de actuación de dicha jurisdicción. La Constitución de 1931 reconoce de manera explícita la jurisdicción militar, mientras que los anteriores textos constitucionales únicamente asumían su existencia, su competencia se circunscribe «*a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados (art 95)*». Es decir, su competencia penal quedaba limitada a aquellos delitos en los que protegen intereses de carácter militar, abandonándose con ello el triple criterio de conexión que se había utilizado habitualmente para subsumir en la jurisdicción militar determinados delitos que pertenecían a la jurisdicción ordinaria – el denominado fuero en razón de la materia, el de las personas y el del lugar de comisión del delito de acuerdo al Código de Justicia Militar de 1980-.

Numeroso esfuerzos por adecuar la jurisdicción militar a unos parámetros más garantistas, la aprobación de normas tales como el Decreto de 31 de diciembre de 1868, la Ley de Orden Público de 20 de abril de 1870 o la Ley de Jurisdicciones de 1906, pusieron de manifiesto la *vis expansiva* que caracteriza a la jurisdicción militar cuando encuentra un régimen político favorable. En función de determinados periodos históricos, así el intento de limitarse era nulo y se expandía. Este hecho se pone de manifiesto especialmente durante el periodo de la Guerra Civil y gran parte del posterior régimen franquista, donde la justicia militar fue instrumentalizada, como un eficaz medio de control social para reprimir la disidencia política e ideológica.

En 1945 se aprueba un nuevo Código de Justicia Militar, que siguiendo las líneas directrices del anterior Código Militar de 1890, devolvía el modelo de jurisdicción militar a su configuración decimonónica al regular su competencia en función de la naturaleza militar del delito cometido y en atención a la persona y al lugar de comisión (art 5). Se genera un modelo de justicia militar fuerte e independiente y con un amplio margen de autoorganización que se proyectará en muy significativo número

de normas posteriores y cuya inercia, a día de hoy, resulta de compleja adaptación a los condicionantes propios de un Estado social y democrático de Derecho.

En 1978, el legislador añadió a la Constitución la finalidad de reducir al máximo posible el papel del Ejército en la vida pública del nuevo Estado social y democrático de derecho. De este modo, el artículo 8.1 regula las funciones a las que queda circunscrito el papel de las Fuerzas Armadas (*«Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional»*). Por otro lado, el artículo 117.5, que adopta el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de la justicia española, circunscribiendo la competencia de la jurisdicción militar al ámbito de lo estrictamente castrense.

La actual Constitución contiene disposiciones relativas a las Fuerzas Armadas en las que existe una serie de limitaciones a los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, que se encuentran en los artículos 15, 25.3, 26, 28 y 29. Su finalidad es imposibilitar la participación en la vida política en aras al principio de neutralidad política, en la línea de lo establecido en el Real Decreto 706/1977, de 1 de abril, y así poner fin al intervencionismo militar en la vida pública que tan habitual había sido desde el siglo XIX.

La primera norma que se adoptó para adaptarse a los parámetros constitucionales fue la Ley Orgánica 8/1980, de 6 de noviembre, de reforma del Código de Justicia Militar, que recogía los límites competenciales establecidos en el punto séptimo de los Pactos de Moncloa. Aún se seguía haciendo referencia al triple criterio de conexión en razón del delito, del lugar y de la persona, aunque con menor alcance que en el Código de Justicia Militar de 1945.

Es con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuando se abandona este triple criterio de conexión y se delimita el ámbito estrictamente castrense a los delitos tipificados en la ley penal militar (art 3.2). Por lo que, la competencia, únicamente podrá fundamentarse en razón de la materia, los delitos militares. No se termina de controlar la *vis* expansiva de la jurisdicción militar puesto que traslada la problemática de la justicia militar a la configuración del delito militar, lo que significa que su competencia puede aumentarse con la tipificación de nuevos delitos militares.

Finalmente, la Disposición Derogatoria incorporada al nuevo CPM elaborado en 1985, y, posteriormente, la Ley Orgánica 4/1987, de 9 de diciembre, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, terminarían por establecer definitivamente el delito militar. El delito militar sería entendido como aquellas conductas ilícitas que afectan a la disciplina, a la jerarquía y/o unidad de las Fuerzas Armadas, como único fundamento de la justicia militar. Esta Ley integra a la jurisdicción militar en el Poder Judicial del Estado (art 1), lo que supone un punto de inflexión fundamental para el modelo de justicia militar, que, hasta entonces, había formado siempre parte de las Fuerzas Armadas.

II. DERECHO PROCESAL MILITAR

1. La jurisdicción militar en el artículo 117.5 de la Constitución

Nuestra actual Constitución reconoce expresamente en su artículo 117.5 la jurisdicción militar, que dice así *«El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución»*.

El artículo 117.5 CE no establece la obligación de crear una justicia militar, sino que en caso de que exista, quede limitada y restringida a conductas muy concretas (lo estrictamente castrense). Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico técnico, nada impediría adoptar otros modelos de jurisdicción militar, como por ejemplo, el de su supresión e incorporación de sus competencias a la jurisdicción ordinaria en tiempos de paz, limitando su competencia únicamente a las situaciones de conflicto armado (tiempos de guerra), tal y como ocurre en un significativo conjunto de sistemas jurídicos en el Derecho comparado (por ejemplo, Alemania, Argentina, Austria, Dinamarca, Francia, Holanda y Portugal).

La referencia de este artículo a la jurisdicción militar hace que ésta sea constitucional, favorable al principio de unidad jurisdiccional² que impone dicho

² En este sentido se expresa, por ejemplo, el Auto del Tribunal Constitucional 121/1984, de 29 de febrero, que reconoce que “la jurisdicción militar en el ámbito castrense está reconocida en el art 117.5 C.E., como la excepción al principio de unidad jurisdiccional, y se halla sometida en su ejercicio a la Ley y a los principios de la Constitución”. Carlos DE LA VEGA BENAYAS, en el Voto particular que formula a la STC 60/1991, de 14 de marzo señala (FJ 3) que “hay que partir de los principios básicos de nuestra

precepto. Si bien, opuesta a la reserva de jurisdicción en favor de los Juzgados y Tribunales que, conforme a las exigencias del principio de división de poderes que establece el art 177.4 CE. Por tanto, el poder constituyente ha previsto como excepción al principio de unidad jurisdiccional la existencia de la jurisdicción militar, desde un punto de vista organizativo, personal y funcional.

Los órganos de la jurisdicción militar asumen la tutela judicial efectiva sin causar indefensión y con todas las garantías previstas en el artículo 24 CE. La jurisdicción militar además está sometida a los principios constitucionales de independencia del órgano judicial, garantías procesales y a los derechos de defensa. Se exige en el ámbito castrense el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías.

2. “Ámbito estrictamente castrense”

La STC 113/1995, de 6 de julio, y la STC 60/1991, de 14 de julio, declaran que para definir el ámbito de lo estrictamente castrense es necesario acudir a la Constitución, en concreto a sus artículos 8 y 30.

El Tribunal Constitucional ha considerado que lo estrictamente castrense ha de ser considerado como un mandato dirigido tanto al legislador como al órgano judicial, y que debe ponerse en relación con el artículo 8.1 CE que enumera las funciones de las Fuerzas Armadas y 30 CE, que establece el derecho y deber de los españoles de defender España. Además, debe ponerse en relación con los objetivos, fines y medios de las Fuerzas Armadas. Igualmente, se ha de tener en cuenta la condición militar del sujeto activo (STC 60/1991, de 14 de marzo).

El artículo 8 de la CE refiere que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, contando con el derecho y el deber constitucional de todos los españoles en el mismo sentido (art 30.1 CE).

Constitución. El primero, en esta materia, es el de la unidad de jurisdicción que consagra el art 117.5. Después dicho precepto salva la jurisdicción militar, cuyo ejercicio la Ley regulará en el ámbito estrictamente castrense. Esto, en llano lenguaje, significa establecer una excepción, y como tal debe ser tratada, es decir, restrictivamente.

Por ello, lo estrictamente castrense es lo que se derive de la organización militar, o lo que es lo mismo, la unidad y disciplina necesarias para que pueda desarrollar con efectividad sus fines y principalmente la defensa nacional³.

Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial ha dictaminado que lo estrictamente castrense solo puede ser aplicado a los delitos exclusiva y estrictamente militares, tanto por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, es decir, los que hacen referencia a la organización bélica del Estado indispensable para las *«exigencias defensivas de la Comunidad como bien constitucional»* (STC 160/1987) como por la necesidad de una vía judicial específica para su conocimiento y eventual represión, habiendo de quedar fuera del ámbito de la justicia militar todas las restantes conductas delictuales.

Para el Tribunal Supremo, es indispensable evaluar la naturaleza del bien jurídico protegido, la relación de los hechos y fines con las Fuerzas Armadas reconocidos en el artículo 8.1 CE, y, en su caso, la condición de militar del sujeto activo (SSTS, Sala 5ª, de 24 de junio de 1991 y de 6 de octubre de 1998).

De igual manera, el Consejo General del Poder Judicial, se ha pronunciado sobre ello estableciendo que:

«El ámbito competencial de la jurisdicción militar ha de ponerse en conexión con la razón de ser de la propia institución, que se encuentra, en último término en necesidad de mantener a los Ejércitos como una eficaz organización de combate en orden al más exacto cumplimiento de los altos fines que le asigna la Constitución»⁴.

3. Independencia judicial

Aparece recogido en el art 6 de la LOCOJM, advirtiendo que todos están obligados a respetar la independencia de los órganos jurisdiccionales militares, así como que ningún órgano inferior podrá corregir lo que dictamine el superior, salvo en caso de resolución de recursos, ni dictar instrucciones.

El TC se pronunció en sentencia 204/1994, de 11 de julio, FJ 8 fijando que:

«El principio de independencia judicial no viene determinado por el origen de los llamados a ejercer funciones jurisdiccionales, sino precisamente por el estatuto que les otorgue la ley en el desempeño

³ Cfr., la referencia a la estructura profundamente jerarquizada del Ejército en el que la unidad y disciplina desempeñan un papel crucial para alcanzar los fines encomendados a la institución por el art.8 de la Constitución en las SSTC 180/1995, de 19 de diciembre (FJ 2); 72/1994, de 3 de marzo (FJ 4); 14/1996, de 29 de enero, (FJ 2) y 179/2004, de 18 de octubre, (FJ 6).

⁴ FERNÁNDEZ SEGADO F., op. Cit. Pág 30.

de las mismas [...] El estatuto del Juez Togado es distinto al de un Juez ordinario, en lo que difícilmente puede no haber acuerdo, si no si ese estatuto vulnera o no los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución [...] El Juez Togado Militar es, con arreglo a su configuración estatutaria independiente en el ejercicio de sus funciones, no estando sometido a instrucciones del poder ejecutivo y sin que esta afirmación, siempre desde la perspectiva del artículo 24 debe verse desvirtuada por la existencia de un específico régimen disciplinario, que pueda serle aplicable, con específicas garantías, a su condición de militar».

Por ello, independientemente de la condición de togados militares, se encuentran al igual que los demás jueces, sometidos al imperio de la ley. Incluso, cuando se perturbe esa independencia, se puede acudir a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central del Consejo General del Poder Judicial⁵.

4. Derecho de defensa

Con la entrada en vigor de nuestra actual Constitución hubo que adaptar el Derecho Penal Militar a los principios constitucionales.

Así pues, no se excepciona el derecho de defensa en la jurisdicción castrense. El TC, se pronuncia *«la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense reconocida en el at. 117.5 CE [...] se halla sometida en su ejercicio a la ley y a los principios de la Constitución»*⁶.

Es un derecho fundamental que aparece recogido internacionalmente, no sólo a nivel nacional. La CE lo menciona en el art 24, indicando que todos los ciudadanos tenemos *«derecho a la defensa y a la asistencia de letrado»*. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1.1 y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y Libertades Fundamentales en su art 6.3 lo declaran igualmente.

En cuanto al ámbito castrense, este derecho viene recogido en el art 102 de la LOCOJM, que dice que *«todos tienen derecho a la defensa ante la jurisdicción*

⁵ FERNÁNDEZ SEGADO F., op. Cit. Pág 39

⁶ Auto del Tribunal Constitucional 121/1984, de 29 de febrero, FJ2. En este sentido se pronuncian también: STC 113/1995 FJ 6 “Por otra parte, los órganos de la jurisdicción militar deben ejercer su potestad jurisdiccional “de acuerdo a los principios de la Constitución” (art 117.5, “in fine,” C.E), lo que significa, entre otras cosas, que están vinculados a los derechos y libertades fundamentales como todos los poderes públicos y que en el ámbito de su competencia, esto es, en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, han de tutelar igualmente los derechos y libertades señalados en el artículo 53.2 de la Constitución” STC 113/1995 de 6 de julio, FJ 7 “El reconocimiento por la Constitución [...] de una jurisdicción militar en el ámbito castrense (art 117.5 CE) no excepciona el ejercicio de los derechos reconocidos en el art 24” y STC 204/1994 de 11 de julio FJ 4 “El derecho a ser oído en juicio en defensa de los propios derechos e intereses es garantía demasiado esencial del Estado de Derecho como para matizarlo o ponerle adjetivos”.

militar», incluso a la autodefensa por parte de los licenciados en Derecho⁷, como atribuye el art 104.

Cuando se produzca una situación en que el inculpado se sitúe fuera de territorio español o en un buque, podrá designar a cualquier Oficial de la unidad o buque para su defensa, cuando se deban instruir diligencias o llevar a cabo el procedimiento judicial, y si no, se asignará uno de oficio entre los oficiales destinados, en virtud del art 107.

La Ley Procesal Militar será la encargada de concretar los diferentes aspectos de este derecho, en concreto lo hace en sus artículos 125 y 126, que enuncian el procedimiento a seguir una que se inicia un procedimiento penal y el nombramiento de la defensa, con sus excepciones.

No hay que olvidar que en el ámbito militar, una sanción disciplinaria puede conllevar privación de libertad, y por tanto se reconoce el derecho de defensa. Tal es así que la STC 21/1981 de 15 de junio, FJ 10 expresa:

«En aquellos caso en que la sanción disciplinaria conlleva una privación de libertad, el procedimiento disciplinario legalmente establecido ha de responder a los principios que dentro del ámbito penal determinan el contenido básico del derecho de defensa, de modo que este derecho no se convierta en una mera formalidad, produciéndose, en definitiva, indefensión».

El instructor de un procedimiento sancionador debe garantizar en todo momento el derecho de defensa del expedientado y las medidas a adoptar⁸.

El ejercicio del derecho de defensa podrá ser practicado tanto por abogado particular como por abogado del turno de oficio del Colegio correspondiente. En caso de no efectuar nombramiento, será designado del turno de oficio. La designación de esta forma permitirá que una vez haya dos nombramientos en un mismo procedimiento, cuando cese el último, se interesará la designación del turno de oficio si se aprecia abuso del derecho. Por ello, el inculpado no podrá rechazar ni desistir del letrado que se encargará de su defensa.

A pesar del reconocimiento de la autodefensa del inculpado, el supuesto típico de autodefensa es el de la última palabra del acusado. Este requisito es obligatorio en todos los procesos acusatorios, y se encuentra recogido en el artículo 318 de la LPM⁹.

⁷ En la actualidad Graduados en Derecho con la condición de Abogado.

⁸ Artículo 50 de la Ley 8/2014, de 4 de diciembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

5. Representación procesal

La defensa del investigado comprende la asistencia técnica pero también la representación procesal. Como regla general ésta se ejerce mediante procurador de los tribunales, cuya designación puede realizarse por libre elección o mediante nombramiento de oficio.

Sin embargo, para el proceso penal militar, la representación por procurador es facultativa, pues la representación en juicio puede realizarse a procurador o letrado. En dichos casos puede conferirse para todos los procedimientos mediante comparecencia ante el Secretario Relator del juzgado togado o tribunal militar que haya de conocer del asunto¹⁰.

6. Competencia de la jurisdicción militar

Gran importancia adquiere la jurisdicción militar en lo que refiere a sus competencias que vienen determinadas en los artículos 12 y siguientes de la LOCOJM, que los enumera en función de tiempo de paz y tiempo de guerra.

En tiempo de paz, la jurisdicción militar será competente en materia penal para conocer de los siguientes delitos y faltas: los comprendidos en el Código Penal Militar; los cometidos durante la vigencia del estado de sitio, los señalados en tratados, acuerdos o convenios internacionales suscritos por España; en los casos de presencia permanente o temporal fuera del territorio nacional de Fuerzas o Unidades españolas de cualquier ejército y en todos aquellos casos en que el inculpado español se encuentre fuera del territorio nacional y no existiendo norma aplicable, se cometan en acto de servicio o en los lugares o sitios que ocupan Fuerzas o Unidades militares españolas.

En tiempo de guerra¹¹ y en el ámbito que determine el Gobierno, además de lo dispuesto con anterioridad, FVlos que se determinen en tratados con potencia u organización aliadas; los comprendidos en la legislación penal común, cuyo conocimiento se le atribuya por las leyes, por las Cortes Generales, o por el Gobierno, cuando estuviere autorizado para ello; todos los tipificados en la legislación española, si

⁹ *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Pág. 200.

¹⁰ Memento Derecho Procesal Penal. Lefebvre El Derecho. 2018.

¹¹ Se entenderá en los términos definidos en el artículo 14 del Código Penal Militar.

se cometen fuera del suelo nacional, y el inculcado es militar español o persona que siga a las Fuerzas o Unidades española; todos los cometidos por prisioneros de guerra.

7. Estructura de la Jurisdicción Militar

La jurisdicción militar se encuentra estructurada conforme al criterio de jerarquía. La regulación de estos Juzgados y Tribunales viene contenida en el Título II de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (artículos 22 a 31)

Constituye la llamada Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, junto con las otras Salas del Alto Tribunal. Constituye el nivel superior en instancia en lo que se refiere a la jurisdicción militar, pero no es un tribunal militar propiamente dicho¹².

Se encuentra integrada por su Presidente y siete Magistrados. Cuatro de los ocho miembros procederán de la Carrera Judicial y los otros cuatro del Cuerpo Jurídico Militar. Su presidente ha de ser nombrado conforme a los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la designación de los presidentes del Tribunal Supremo. Los procedentes de la Carrera Judicial serán nombrados de igual forma que los demás Magistrados del Tribunal Supremo. Los procedentes del Cuerpo Jurídico Militar serán nombrados por Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso, en situación de servicio activo.

Cuando la Sala de lo Militar no se constituya en su totalidad, habrá pariedad de miembros de una y otra procedencia, sin incluir al Presidente.

En los casos cuyo conocimiento corresponda en única instancia a esta sala, se designará por ésta, por turno y entre sus miembros un Magistrado Instructor que no podrá formar Sala en el asunto que haya tramitado, para evitar así una contaminación previa.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión contra las resoluciones del Tribunal Militar Central y de los Tribunales

¹² CALDERÓN CEREZO A., “Delimitación constitucional de la jurisdicción militar”. La Ley, nº 98-99, noviembre-diciembre de 2012, pág 12.

Militares Territoriales, conocerá de la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos por delitos y faltas no disciplinarias, de los incidentes de recusación contra uno o dos Magistrados de la Sala o más de dos miembros de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, de los recursos contra resoluciones dictadas por el Magistrado Instructor, de los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar que procedan contra las sanciones impuestas o reformadas por el Ministro de Defensa o la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, de los recursos contra las sanciones disciplinarias judiciales impuestas a quienes ejerzan funciones judiciales, fiscales o Secretarías Relatorías, y no pertenezcan a la propia Sala, de los recursos de apelación en materia de conflictos jurisdiccionales que admita su ley reguladora contra resoluciones en primera instancia del Tribunal Militar Central, etc.

Del Tribunal Militar Central (artículos 32 a 43)

Ostenta competencia sobre todo el territorio nacional y su sede se encuentra en Madrid.

Se halla compuesto por un Auditor Presidente, que será General Consejero Togado; Cuatro Vocales Togados, Generales Auditores y, los Vocales Militares, Generales de Brigada o Contralmirantes, designados por la forma del artículo 39 y que deberán pertenecer al Cuerpo General de las Armas en el Ejército de Tierra, al Cuerpo General o al de Infantería de Marina, en la Armada y al Cuerpo en el Ejército del Aire.

El Tribunal Militar Central actuará en Sala de Justicia y Sala de Gobierno.

La Sala de Justicia conocerá de los procedimientos que siendo de la de la competencia de la Jurisdicción Militar y no estando atribuidos a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, se instruyan por delito cometido en cualquier lugar del territorio nacional, o fuera de éste, cuando los inculpados, o el más caracterizado, siendo varios en un mismo procedimiento, ostenten alguna de las cualidades o circunstancias del artículo 34.1, así como de los incidentes de recusación de uno o dos miembros del Tribunal Militar Central, Jueces Togados Centrales y todos o mayor parte de los Tribunales Militares Territoriales, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Jueces Togados Centrales, de las apelaciones contra las sentencias dictadas por Jueces Togados Centrales en procedimientos por falta común, de los recursos de apelación en materia de conflictos jurisdiccionales que admita su ley reguladora contra

resoluciones en primera instancia de los Tribunales Militares Territoriales, de las cuestiones de competencia entre Tribunales Militares Territoriales, entre Juzgados Togados Militares pertenecientes a distintos territorio o entre aquéllos y éstos, etc.

La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central tendrá las atribuciones de gobierno del propio Tribunal y de los órganos judiciales militares inferiores, la potestad disciplinaria judicial militar y ejercerá la inspección de los Tribunales Militares Territoriales y de los Juzgados Togados, así como las demás funciones que esta Ley o la procesal militar le encomienden, todo ello sin perjuicio de las facultades que esta Ley atribuye al Consejo General del Poder Judicial. Asimismo se le atribuye la potestad para imponer sanciones disciplinarias militares por faltas muy graves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones judiciales, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

En lo que atañe a los Vocales Militares, a principio de cada año judicial¹³, se confecciona una lista de Generales de Brigada y Contraalmitantes en servicio activo y destinados en órganos centrales de Defensa o Cuarteles Generales, y que será remitida al Tribunal Militar Central. Antes de la celebración del juicio oral, se extraerán dos personas integrantes de la lista, en función del cual pertenezca el inculcado y, si son varios, se procederá conforme al más distinguido. En caso de pertenecer al Cuerpo de la Guardia Civil, el Vocal Militar será General de Brigada del Cuerpo, con el mismo procedimiento. El primer sorteo se realizará para el que forme parte del Tribunal, ostentando la posición de Vocal Militar, mientras que el segundo será suplente.

De los Tribunales Militares Territoriales (artículos 44 a 52)

Por ley se determinará la división territorial¹⁴ jurisdiccional militar de España. En la misma ley se determinará la sede de los Tribunales Militares Territoriales, una de las cuales tendrá que fijarse en Madrid. La ley que lo determina en este caso es la Ley 44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción

¹³ Del 1 de septiembre o siguiente día hábil al 31 de julio del año siguiente (Art 179 LOPJ).

¹⁴ Artículo 2 de la Ley 44/1998. “División territorial. A los efectos jurisdiccionales militares, el territorio español se divide en: Territorio primero: comprende las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de la Región de Murcia, de Madrid y Valenciana. Territorio segundo: comprende la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Territorio tercero: comprende las Comunidades Autónomas de Cataluña, de Aragón, de las Islas Baleares y la Comunidad Foral de Navarra. Territorio cuarto: comprende las Comunidades Autónomas de Galicia, del Principado de Asturias, de Castilla y León, de Cantabria, del País Vasco y de La Rioja. Territorio quinto: comprende la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Militar, y ésta determina la existencia de sedes en Madrid, Sevilla, Barcelona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife.

La composición del Tribunal Militar Territorial viene formada por un Auditor Presidente, Coronel Auditor; Cuatro Vocales Togados, dos con empleo de Teniente Coronel Auditor y dos con el de Comandante Auditor y, los Vocales Militares, Comandantes o Capitanes de Corbeta en situación de plena actividad, pertenecientes al Cuerpo General de las Armas en el Ejército de Tierra; al Cuerpo General y al de Infantería Marina, en la Armada; Cuerpo General en el Ejército del Aire. Cuando un Tribunal Militar Territorial tenga más de una Sección, el Auditor Presidente del Tribunal lo será también de la Sección Primera.

El Tribunal Militar Territorial conocerá: de los procedimientos por delito de la competencia de la jurisdicción militar cometidos en su territorio y no reservados a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ni al Tribunal Militar Central, de los incidentes de recusación de uno o dos miembros del propio Tribunal y Jueces Togados Militares de su territorio, de los recursos que procedan contra las resoluciones dictadas por los Jueces Togados Militares de su territorio, de los recursos de apelación contra las sentencias de los Jueces Togados de su territorio en procedimientos por falta común de la competencia de la jurisdicción militar, de las cuestiones de competencia entre los Jueces Togados de su territorio, de los recursos jurisdiccionales que procedan, en materia disciplinaria militar, por sanciones impuestas por los mandos militares y que no sean de la competencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ni del Tribunal Militar Central.

De los Juzgados Togados Militares (artículos 53 a 62)

Los Juzgados Togados Militares están a su vez integrados por Juzgados Togados Militares Centrales y Juzgados Togados Militares Territoriales.

En lo que se refiere a los Centrales, son dos, y tienen su sede en Madrid. Los Territoriales, ostentan una división territorial conforme a la Ley 44/1998; si bien, en la sede de cada Tribunal Militar Territorial existirá al menos un Juzgado Togado Militar, que con carácter general cada uno tendrá competencia sobre todo el territorio correspondiente a la jurisdicción de aquél.

Corresponde a los Juzgados Togados Militares Centrales la instrucción de los procedimientos penales militares cuyo conocimiento corresponda al Tribunal Militar Central, la instrucción y fallo de los procedimientos por falta común que se atribuyan a la jurisdicción militar seguidos contra las personas con fuero ante el Tribunal Militar Central y la práctica de las diligencias que otro órgano jurisdiccional le encomiende.

Los Juzgados Togados Militares Centrales serán desempeñados por Coroneles Auditores.

Los Juzgados Togados Militares Territoriales ostentarán las siguientes funciones: la instrucción de los procedimientos penales militares por hechos ocurridos en la demarcación de su competencia y cuyo conocimiento corresponda al respectivo Tribunal Militar Territorial; la instrucción y fallo de los procedimientos por falta común que se atribuyan a la jurisdicción militar seguidos contra las personas con fuero ante el Tribunal Militar Territorial a cuyo territorio pertenezcan; el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.º de su Ley Orgánica reguladora; la vigilancia judicial penitenciaria en relación con los establecimientos penitenciarios militares y sus internos, la práctica de las diligencias que otro órgano jurisdiccional les encomiende; las actuaciones a prevención y prórrogas de jurisdicción que determine la legislación procesal militar y las funciones que se les encomienden por otras leyes.

Los Juzgados Togados Militares serán desempeñados por miembros del Cuerpo Jurídico Militar, del empleo que para cada uno se señala por esta Ley. Su nombramiento se efectuará mediante orden por el Consejo General del Poder Judicial, previo informe motivado de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, en los términos y por el procedimiento expresado en el artículo 47.

De los Órganos Judiciales Militares que acompañan a Fuerzas Españolas fuera del suelo nacional (artículos 63 y 64)

Las Fuerzas españolas, cuando salgan de suelo nacional en cumplimiento de una misión que se prevea duradera, serán acompañadas por los órganos judiciales militares que se estimen necesarios, en atención al número de tropas y a la previsible duración de la estancia fuera de España.

El conocimiento de los procedimientos instruidos por los delitos cometidos en los desplazamientos y estancias corresponderá al Tribunal Militar Central o al Tribunal Militar Territorial con sede en Madrid, según sus respectivas atribuciones.

La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o el Tribunal Militar Territorial con sede en Madrid, respectivamente, propondrán al Ministro de Defensa si el acto de la vista debe celebrarse en su sede, con traslado a ella del inculpado o inculpados, testigos u otros medios de prueba y remisión del procedimiento, o en el lugar de la instrucción, en atención a las circunstancias del hecho y a las conveniencias de ejemplaridad.

8. Cuestiones de competencia

Existen dos posibles formas de cuestiones de competencia, tanto la positiva como la negativa. Pueden ser promovidas tanto de oficio como a instancia de parte.

Las cuestiones positivas de competencia deben ajustarse a unas reglas en las que el Juez o Tribunal que se considere con competencia, previo informe del Fiscal Jurídico Militar, debe requerir de inhibición al juez o tribunal que conozca del asunto, por medio de oficio con el que se remitirá testimonio comprensivo del auto dictado y del informe del Fiscal. El Órgano requerido debe acusar recibo en tanto en cuanto llegue a su poder, y debe resolver, previo informe del Fiscal sobre si mantiene la competencia o se inhibe. En caso de inhibición, se han de remitir las actuaciones al requirente y las piezas de convicción, poniendo a su disposición a los inculpados, mientras que, si acuerda la competencia, expondrá las razones por las que la sostiene. Si el requirente no accediere a la petición, resolverá si se aparta de la competencia, en tal caso debe comunicar sus desistimiento, o si sigue en ella, por la que deberá elevar las actuaciones al tribunal al que corresponda la resolución, comunicándoselo al requerido para que eleve sus actuaciones.

En las cuestiones negativas de competencia, el Juez o Tribunal que se considere incompetente se debe inhibir, remitiendo las actuaciones al órgano judicial que estime competente, que debe pronunciarse sobre si la acepta o no, siendo preceptivo el informe del Fiscal Jurídico Militar. Si aceptase la competencia, ha de existir una comunicación inmediata para la puesta a disposición de los inculpados y piezas de convicción. Si la rechazase, debe enviar los autos al remitente, que resolverá sobre el desistimiento o sostenimiento de la cuestión planteada. En caso de sostenerla, se elevarán las

actuaciones al Tribunal que corresponda para su resolución, comunicándoselo al otro para que lo haga en iguales términos.

9. Gratuidad de la justicia en el ámbito castrense

Nuestra Carta Magna en su artículo 119 introduce que *«la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar»*. Así, se encuentra estrechamente vinculado con los derechos de igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, defensa y asistencia de letrado, derechos fundamentales, derecho a la asistencia de abogado y garantías del derecho a la libertad (arts 14, 24 y 17.3 CE).

En lo que a nosotros nos interesa, la jurisdicción militar, observamos un doble pronunciamiento. Por un lado encontramos la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que indica en su art 10 *«la justicia militar se administrará gratuitamente»* y, por otro lado, el art 454 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril Procesal Militar, con referencia al recurso contencioso-disciplinario militar, *«el procedimiento contencioso-disciplinario militar será gratuito y en él no podrá condenarse en costas ni exigir depósitos»*.

Así, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el art 20.1 y 2 señala *«la Justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley, y se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los arts. 24 y 119 de la Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar»*.

No debemos olvidar la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

10. Actos procesales

La forma de materializarse las actuaciones judiciales serán clasificadas en función del sujeto emisor. Estas resoluciones serán de forma escrita.

Las resoluciones de carácter judicial reciben el nombre de providencias, autos y sentencias. Las resoluciones de carácter gubernativo o administrativo reciben el nombre de acuerdos.

Las actuaciones realizadas por los secretarios relatores son las diligencias, actas y decretos¹⁵.

11. Medidas cautelares sobre personas

11.1 Citación

A la persona a la que se le impute un acto punible se la citará para ser oída, a no ser que la ley disponga lo contrario, o que proceda su detención.

11.2 Detención

La detención de las personas responsables de hechos constitutivos de delito con competencia de la jurisdicción militar puede acordarse por el Juez Togado que incoe las actuaciones, así como por las autoridades o sus agentes facultados legalmente para ello, siempre en los casos y formas prescritos en la Ley.

El detenido o, en su nombre el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos y los representantes de menores e incapacitados podrán comparecer verbalmente en cualquier momento sin formalismos ni necesidad de Abogado ante el Juez Togado o Tribunal Militar a cuya disposición se encuentre el detenido, para exponer las consideraciones oportunas referentes a los motivos, tiempo y condiciones de la detención con objeto de la resolución inmediata conforme a la legalidad, lo que permitirá la incoación del proceso de *«habeas corpus»*.

La elevación de la detención a prisión y la libertad del detenido se acordará por auto, susceptible de recurso de apelación, que se notificará al Fiscal Jurídico Militar, al acusador particular (en su caso), y al interesado. Se pondrá en conocimiento del Jefe de quien dependa el detenido.

La detención de un militar en actividad, dispuesta por las personas con competencia para ello¹⁶ se realizará conforme al ordenamiento judicial común, en especial si se trata de flagrante delito. Sin embargo, se ejecutará a través de sus jefes si estuviera a su alcance inmediato o para evitar el retraso con perjuicio grave. Se habrá de dar cuenta inmediata a los jefes del militar detenido en caso de que los mismos no

¹⁵ *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Pág 217.

¹⁶ “Autoridad judicial de cualquier jurisdicción, miembros del Ministerio Fiscal, Autoridad gubernativa, funcionario o agente” (art 205 LPM).

hubieran intervenido en dicha detención, sin perjuicio del derecho y deber del detenido de la comunicación inmediata a sus superiores¹⁷. No obstante, sin perjuicio de lo anterior se establecen las siguientes reglas:

«Primera. Si el militar se encuentra desempeñando un servicio de armas u otro cometido esencialmente militar, se llevará a cabo solamente por sus Jefes de quienes se interesará, a no ser que hubiera cometido delito flagrante y estuviere fuera del alcance de dichos Jefes.

Segunda. Si el militar se encuentra en recinto militar se interesará la detención del Jefe de mayor empleo y antigüedad que se encuentre destinado y presente en él».

La detención del militar en actividad se cumplirá en establecimiento penitenciario militar de la localidad donde se produzca la detención y si no existiere, en otro establecimiento militar. De igual modo, el militar estará a disposición de quien haya realizado su detención, pudiendo ser conducido ante el mismo cuantas veces sea necesario.

El detenido sólo permanecerá en establecimientos no destinados al ámbito militar el tiempo indispensable para la práctica de atestado o diligencias y en modo separado de los demás detenidos.

11.3 Prisión preventiva

La competencia Sólo para decretar la prisión preventiva recae sobre el Juez o Tribunal que esté conociendo del proceso, el que forme las primeras diligencias, el que actúe por comisión o el que reciba al detenido para su traslado a Juez distinto.

Para que concurra la prisión preventiva han de producirse tres circunstancias: primera, que a juicio del Juez Togado exista un hecho constitutivo de delito; segunda, que éste tenga pena superior a seis años de prisión o prisión menor. La prisión podrá decretarse, aunque la pena sea inferior a las mencionadas, cuando el Juez lo considere conveniente, atendidas las circunstancias del delito y las personales y antecedentes del inculcado o cuando se trate de hechos que revistan gravedad o peligro en relación con la disciplina o el servicio. Cuando el Juez haya decretado la prisión preventiva en caso de delito que tenga prevista pena inferior a la de seis años de prisión, podrá, según su criterio, dejarla sin efecto, si las circunstancias tenidas en cuenta hubiesen variado, acordando la libertad del inculcado y, tercera, que aparezcan en la causa motivos suficientes para considerar responsable criminal del delito a la persona sobre la que se haya de acordar la prisión.

¹⁷ Artículo 73 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

También puede decretarse la prisión cuando el inculpado, concurriendo las circunstancias primera y tercera, deje de comparecer sin causa justificada al llamamiento judicial, cualquiera que sea la pena señalada para el delito perseguido y estado del procedimiento, estuviera o no decretada su prisión.

En cuanto a la duración de la prisión preventiva, la misma no puede exceder de seis meses cuando se trate de delito para el que la Ley señala prisión de hasta dos años, ni podrá exceder de un año cuando la pena privativa de libertad señalada por la Ley sea superior a dos años de prisión. En caso de varios delitos imputados, se sumarán las duraciones de las penas respectivas y se computarán conforme a lo dicho con anterioridad. Excepcionalmente, si el procedimiento no ha podido verse anteriormente y existen razones fundadas de que pudiese eludir en libertad la acción de la justicia, podrá prorrogarse hasta dos y cuatro años, respectivamente, por auto del Juez Togado con audiencia del presunto culpable y del Fiscal Jurídico Militar. Si estuviese en prisión mientras el recurso de la sentencia, la prisión preventiva no puede prolongarse por más tiempo que la mitad de la pena impuesta.

Cuando por un Órgano Judicial de cualquier jurisdicción se hubiera acordado la prisión preventiva respecto de un militar en situación de actividad o reserva, la sufrirá en establecimiento penitenciario militar, interesándose, por quien la hubiere acordado, su ejecución de la Autoridad Militar de quien dependa, la cual dará cumplimiento inmediatamente al requerimiento. En caso de que no existiere establecimiento de esta clase en la plaza o inmediaciones, se llevará a efecto en el acuartelamiento, base o buque militar que designe la Autoridad Militar que hubiere recibido el acuerdo. En todo caso ésta comunicará a la judicial correspondiente el lugar, día y hora de ejecución de lo acordado conforme a las condiciones que se expresen en su comunicación (art 219 LPM).

Si fuese imposible el cumplimiento en establecimiento militar, la prisión preventiva se llevará a cabo en establecimiento común, con absoluta separación de los demás detenidos presos.

11.4 Prisión incomunicada

Cuando se decrete la prisión incomunicada del detenido con las formalidades de la Ley común, el acuerdo debe ponerse en conocimiento del Gobernador o Director del

establecimiento penitenciario o del Jefe de la unidad en que se encuentre, para que se adopten medidas eficaces de aislamiento. Los autos por los que se acuerde o se levante la incomunicación son susceptibles de recurso de apelación.

11.5 Prisión atenuada

De oficio o a petición de parte, el Juez con facultades para acordar la prisión preventiva o el Tribunal cuando el sumario se haya dado por concluso, podrá disponer que la prisión sea atenuada, cuando concurran circunstancias excepcionales. El quebrantamiento de la misma o incumplimiento de las condiciones o normas de salida, darán lugar a su revocación, pudiendo exigirse responsabilidad. La concesión, denegación y revocación se realizarán mediante auto, susceptible de recurso de apelación.

El preso podrá salir del lugar donde cumpla la prisión atenuada, previa autorización del Juez Togado, a su trabajo habitual, actividades profesionales, etc, con la obligación de reintegrarse al lugar de internamiento al término de las mismas. En iguales términos para la asistencia a sus prácticas religiosas o asistencia médica, o cualquier otra causa justificada a juicio del Juez Togado o del Tribunal Militar.

12. Libertad provisional

Cuando no resulten motivos que justifiquen la prisión o se desvanezcan los que hubieren dado lugar a ella, se acordará la libertad provisional. Tendrá competencia para ello el Juez Togado o el Tribunal correspondiente en cualquier momento del proceso. De igual forma, la libertad provisional procede en tres casos: cuando el preso lleve en prisión preventiva un tiempo igual o superior a la pena que pudiere corresponderle, cuando se cumpla el plazo máximo establecido para la prisión preventiva, y, cuando el Fiscal Jurídico Militar en su escrito de calificación provisional pida para el procesado pena que no sea privativa de libertad, o, aún siéndolo fuere de menor duración que el tiempo sufrido en prisión preventiva; y en consecuencia solicite la libertad provisional.

Podrá acordarse la prisión preventiva cuando el procesado deje de comparecer los días señalados o no acudiese al llamamiento judicial. En caso de denegación por auto la libertad provisional, cabe recurso de apelación en un solo efecto.

Menester apuntar que queda prohibido para el ámbito castrense la libertad provisional con fianza.

13. Procedimientos

En el ámbito del proceso penal militar se regulan los siguientes procedimientos: procedimiento preliminar (diligencias previas), diligencias preparatorias y sumario ordinario.

13.1 Procedimiento preliminar (Diligencias previas)

El procedimiento preliminar (diligencias previas) se aplica en caso de imposibilidad de determinación del procedimiento a seguir. El Juez Togado Instructor realiza las averiguaciones y recoge la información necesaria para posteriormente dar el tratamiento procesal correspondiente. Es decir, su objeto es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, participación y procedimiento penal aplicable.

Para ello debe realizar una resolución motivada, aplicando el derecho a la tutela judicial efectiva¹⁸ en su manifestación de acceso a la jurisdicción como el derecho a obtener una resolución fundada, condicionando dicho pronunciamiento del Juez Togado Instructor, analizando unos hechos y argumentando, en su caso, la entidad penal de los mismos.

La exigencia de resolución motivada se encuentra recogida en el artículo 82 de la LPM. Por ello, si la información inicial no resulta suficiente, debe ser complementada a través de una investigación (art 141 LPM).

La resolución motivada y fundada en Derecho será susceptible de recurso; en este caso corresponde el recurso de queja¹⁹, si resuelve sin más trámite, o, el de apelación, si resuelve tras la instrucción de las correspondientes diligencias previas.

Durante las diligencias previas, el juez actúa con todas las prerrogativas inherentes a su condición. Así, puede adoptar todas las medidas cautelares reservadas a

¹⁸ STC 112/2015, de 8 de junio, FJ 5: «El derecho a la tutela judicial efectiva (art 24) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes (...)».

¹⁹ Todos los autos no apelables del Juez Togado (art 248 LPM).

la autoridad judicial (art 141 LPM²⁰) encaminadas al aseguramiento de las responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse de los hechos que pudieran tener trascendencia penal. Es decir, se refuerza el procedimiento judicial, pues la competencia es exclusiva jurídica, por su posible incidencia en derechos fundamentales, y la garantía existente en el procedimiento penal. Si de ello se apreciase la existencia de un ilícito penal y se elevasen al procedimiento sumario o de diligencias preparatorias, todo ello se integraría automáticamente en el procedimiento sin necesidad de ser ratificado.

Toda la actuación en este procedimiento tiene la posibilidad de estar sometido a un control y revisión por parte de un órgano judicial y distinto, esto es, el Tribunal Militar del que dependa el Juez Instructor. Ante él se podrán impugnar tanto las cuestiones de forma como de fondo, cuando considere el interesado que las actuaciones no se han ajustado a las normas del procedimiento correspondiente, que serán las del procedimiento judicial ordinario.

El fin de las diligencias previas se realizará por auto, recurrible en apelación. El fin de las mismas llega cuando: primero, se archivan las actuaciones por la inexistencia de infracción penal; segundo, se archivan las actuaciones con remisión de lo actuado a la autoridad con potestad disciplinaria por si pudieran revestir los mismos carácter disciplinario; tercero, remiten lo actuado al Juez Togado correspondiente si se aprecia falta de competencia de la Jurisdicción Militar; cuarto, remiten lo actuado a la autoridad judicial competente, si se trata de personal aforado a un Tribunal distinto del que es instructor el juez que inició las Diligencias Previas; quinto, se eleva a Sumario o a Diligencias Preparatorias las actuaciones cuando exista un delito militar y, sexto, cuando se inhiba a favor de la Jurisdicción ordinaria, si se aprecia competencia de la misma²¹.

13.2 Diligencias preparatorias

²⁰ Art 141 de la LPM: «(...) El Juez Togado podrá acordar las medidas cautelares previstas en esta Ley y si se transforman las diligencias previas en sumario o en diligencias preparatorias, lo actuado no necesitará de posterior ratificación (...)».

²¹ *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Págs 233 a 252.

Las diligencias preparatorias, procedimiento similar al abreviado, son aplicables para el enjuiciamiento de determinados delitos. Los delitos²² son los correspondientes a los delitos de abandono de destino o residencia, de deserción y de quebrantamiento especial del deber de presencia y delitos contra la hacienda en el ámbito militar, siempre que se cometan como medio para perpetrar dichos delitos o procurar su impunidad.

Este procedimiento es de trámites reducidos. Se intenta que la fase de instrucción cuente con los mínimos elementos imprescindibles para fijar la posición acusadora provisional. Las actuaciones, en medida de lo posible, deben realizarse en la fase de juicio oral.

En un primer momento, una vez que el Juez Togado tenga conocimiento de la concurrencia de unos hechos susceptibles de ser objeto de este procedimiento, debe acordar por auto la iniciación de mismo, comunicándoselo al Fiscal Jurídico Militar y al Tribunal Militar Territorial del que dependa la incoación de dicho procedimiento.

Si el mismo se inicia con motivo de un parte militar, el párrafo segundo del artículo 389²³ de la LPM establece los requisitos necesarios del mismo para su emisión. En cambio, si la noticia no hubiese recibida a través de este medio, debe solicitar a la unidad de destino del militar la documentación necesaria sobre el posible parte de ausencia.

Tras ello, el Juez Togado debe llamar y buscar al inculcado ausente, y si no es posible hallarlo, tomar las medidas necesarias para el procedimiento contra reos ausentes. En principio, el ausente será llamado por requisitoria. En caso de no tener éxito, se declarará su rebeldía y el archivo provisional de las actuaciones, hasta que se presente o sea hallado. Si aparece, se le debe tomar declaración sobre los hechos en presencia de su abogado.

Seguidamente, el Fiscal Jurídico Militar y la defensa, con toda la documentación recibida deben solicitar la práctica de pruebas nuevas, que en caso de ser concedidas,

²² Delitos correspondientes al artículo 384 de la LPM.

²³ Párrafo segundo del artículo 389 de la LPM «*Si el procedimiento se iniciare con motivo del parte militar a que se refiere el número 2 del artículo 130 de esta Ley, en él se especificará el día y la hora en que se produjo la ausencia, así como las circunstancias relativas al momento de su incorporación, y si ésta ha sido o no espontánea. A dicho parte se acompañará la documentación militar del inculcado y la relación valorada de los objetos pertenecientes al Ejército que se hubiera llevado consigo; asimismo, se adjuntará al procedimiento la documentación relativa a las listas y controles de los que pueda deducirse la ausencia del inculcado*».

posteriormente serán practicadas en caso de especial complejidad o por razones en las que no se puedan llevar a cabo en el acto de la vista.

Una vez finalizado, el Juez Togado dictará auto declarando conclusas las diligencias preparatorias notificándose al Fiscal Jurídico Militar, para que se pronuncie sobre el sobreseimiento o apertura de juicio oral, y la calificación de los hechos.

Una vez reciba el Juez Togado estas actuaciones, deben ser remitidas al Tribunal Militar Territorial con competencia para su conocimiento de los hechos.

Hemos de destacar que en este procedimiento no puede existir ni acusación popular, ni particular, así como tampoco Abogacía del Estado²⁴.

13.3 Sumario ordinario

El sumario ordinario se aplica para el resto de delitos en los que no se aplica las diligencias preparatorias.

Tanto el Sumario como las Diligencias previas pueden iniciarse: primero, de oficio, cuando el Juez togado tenga conocimiento directo de la comisión de hechos punibles de su competencia; segundo, por denuncia de quien tuviere conocimiento de su perpetración o parte militar remitido directamente al Juez Togado más cercano por el jefe de la Unidad a que pertenezca el presunto culpable o por la Autoridad Militar del territorio donde se hubieran cometido los hechos; tercero, a excitación del Fiscal Jurídico Militar del territorio, cuando este hubiera tenido conocimiento de la infracción penal o ante él fuera presentada denuncia sobre hechos que pudieran constituirlos; cuarto, por incitación del Tribunal Territorial a cuya jurisdicción pertenezca el Juzgado Togado al que corresponda conocer, o del Tribunal Central; quinto, por querella, en el supuesto del artículo 108 de la LOCOJ, y con exclusión, en caso de conflicto armado, de acuerdo con el artículo 168 de la misma Ley y, sexto, por denuncia del agraviado, que, en los delitos comunes perseguibles a instancia de parte de que pueda conocer la Jurisdicción

²⁴ *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Págs 281 a 295.

Militar, será necesaria para la iniciación de alguno de los procedimientos regulados para este Capítulo²⁵.

Podemos observar que el único especialmente castrense es el referente al del parte militar, que debe ser por escrito por ser éste remitido directamente al Juez por el Jefe de la Unidad.

Todas las actuaciones desarrolladas por el Juez Togado se llevarán a cabo, según establece el art 153 LPM, en la forma prevenida en la LECrim y sus disposiciones complementarias, con las particularidades de la LPM. Aquí se proclama el carácter supletorio de la LeCrim.

Una de las particularidades, al margen del parte y el atestado militar, consiste en el establecimiento para el Juez Togado, la obligación de comunicar el inicio del sumario al Jefe de la Unidad del militar o militares que resulten imputados, siempre que se encuentren en servicio activo (art 131 LPM).

Existe un acto de vital importancia que, llegado el momento, sin él la instrucción no podría continuar y éste es el procesamiento. El procesamiento consiste en la declaración de la existencia de «*indicios racionales de criminalidad*» en cierta persona. Por ello, el artículo 164 de la LPM, en su segundo párrafo establece «El procesamiento se dictará por auto, y contendrá en sus apartados los hechos punibles que se atribuyan al procesado, el presunto delito o delitos que aquellos constituyan, con cita de los preceptos legales en los que se tipifican...». En dicho auto se debe acordar la situación del militar, acordando la prisión o libertad provisional, así como las medidas encaminadas a asegurar las responsabilidades civiles.

En ese mismo auto, se puede acordar la elevación a sumario del procedimiento. En caso de inexistencia de procesamiento o revocación del mismo, dará lugar al archivo del procedimiento si se tratase de diligencias previas o bien a la propuesta de sobreseimiento por parte del Juez Togado.

Como especialidad castrense, se establece que una vez adquiriera firmeza el auto de procesamiento, un testimonio del mismo debe remitirse al Ministerio de Defensa o a la Dirección General de la Guardia Civil para que procedan como corresponda respecto a la situación militar.

²⁵ Artículo 130 de la LPM.

Para finalizar el sumario, entendiendo éste como la preparación para el inicio de la fase oral, debe darse el auto de conclusión del sumario. En caso de inexistencia del mismo, estaríamos ante una propuesta de sobreseimiento, que puede proponer tanto el Juez Togado como el Fiscal Jurídico Militar. El sobreseimiento podrá ser definitivo²⁶ o provisional²⁷.

Sin embargo, el único sobreseimiento que puede darse en fase sumarial es el que se da respecto del cual el Juez Instructor únicamente puede proponerlo, puesto que el pronunciamiento definitivo corresponde al Tribunal. También puede darse en la fase intermedia, fuera del sumario, una vez dictado el auto de conclusión del sumario por el Juez Instructor, y como alternativa a la apertura de juicio oral. Incluso dentro del juicio oral para resolver cuestiones o excepciones como artículos de previo y especial pronunciamiento (arts 244, 242 y 286 LPM). Cuestión distinta es la propuesta del sobreseimiento por parte de la defensa, que, en principio, no habría ningún inconveniente, pues llegaría al órgano decisor a través del recurso de queja contra la

²⁶ Artículo 246 de la LPM «Procederá el sobreseimiento definitivo: 1.º Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa. 2.º Cuando el hecho no constituya delito. Si el hecho fuere constitutivo de falta penal de la competencia de la Jurisdicción Militar, el Tribunal enviará lo actuado al Juez Togado cuya sede sea más cercana a la del Juez Instructor, dentro del mismo territorio para que falle el procedimiento. Si la infracción penal fuere competencia de la jurisdicción ordinaria se inhibirá en favor del órgano competente de dicha jurisdicción. Si el hecho es constitutivo de falta disciplinaria militar, deducirá testimonio de particulares para su remisión a la Autoridad o Mando militar con competencia sancionadora. A estos efectos el tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento judicial hasta la firmeza del auto de sobreseimiento no se computará para la prescripción de la falta disciplinaria. 3.º Por fallecimiento del procesado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o administrativas exigibles. En este caso, si interesa a los perjudicados reclamar la responsabilidad civil a los herederos del fallecido, se acordará la expedición de un testimonio de particulares para el ejercicio de las acciones pertinentes ante los Órganos de la Jurisdicción ordinaria. Los embargos de bienes decretados en la causa así sobreseída se mantendrán durante el plazo necesario para que el perjudicado acredite haber hecho uso de su derecho ante los órganos competentes, sin que pueda exceder de dos meses. Transcurrido dicho plazo se levantarán los embargos y se entregarán los bienes a los herederos del procesado que acrediten su condición, si antes de finalizar el mismo no se hubiere acreditado por los actores el ejercicio de la acción civil. No obstante la acreditación de dicho ejercicio, el embargo de los bienes se levantará y se entregarán éstos a los herederos del fallecido, si transcurrido un año desde la entrega del testimonio de particulares no hubieren sido reclamados los bienes por el órgano judicial competente. Las responsabilidades civiles exigibles por el Estado se harán efectivas conforme a las leyes y reglamentos, quedando afectos a la misma los bienes embargados en la forma, plazos y condiciones que se especifican en los dos párrafos anteriores. 4.º Cuando el procesado aparezca exento de responsabilidad criminal o se hayan desvanecido por completo los indicios que hubieran dado motivo a proceder contra él. 5.º Cuando aparezcan plenamente probados en autos: la extinción de la acción penal con arreglo a las leyes, la existencia de una excusa absolutoria o los motivos que señalan los números 2 a 4 del artículo 286. Podrá acordarse el sobreseimiento, aunque la causa no se halle en sumario, cuando conste la existencia de motivos para decretar aquél con arreglo a los números 3.º y 5.º de este artículo».

²⁷ Artículo 287 de la LPM «Procederá el sobreseimiento provisional: 1.º Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa. 2.º Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar de él a determinada persona como autor, cómplice o encubridor».

resolución del Juez Togado por no tomar en consideración la pretensión del defensor que se acuerde o no porponer el sobreseimiento al Tribunal.

Al margen del posible sobreseimiento anticipado, el modo habitual de terminación del sumario se realiza a través del auto de conclusión. Tendrá lugar cuando a juicio del Juez Togado se hayan practicado todas las diligencias precisas, tanto las decretadas de oficio como de parte y en él se declarará concluso el sumario. En este mismo auto se acordará la remisión del sumario al Tribunal, incluyendo las piezas de convicción y las piezas separadas. Es irrecurrible pero las partes podrán mostrar su conformidad o disconformidad formulando un escrito (art 240.2 LPM). Cuando el auto de conclusión resulte aprobado por el Tribunal y devenga firme el Tribunal por auto mandará abrir juicio oral, dando con ello fin al sumario y abriéndose la fase de juicio oral, que a diferencia del sumario, tiene carácter público²⁸.

13.4 Otros procedimientos

También se regula el procedimiento sumarísimo, que será aplicado en situación de conflicto armado para el enjuiciamiento de determinados delitos militares flagrantes que revisten de especial gravedad o que afecten de forma grave a la moral o a la disciplina de las Fuerzas Armadas²⁹, seguridad de las unidades, plazas, buques, aeronaves o bases militares, cuando así sea declarado por el Gobierno. El objeto del mismo es el rápido restablecimiento del orden jurídico perturbado por el delito

De igual forma, la legislación castrense recoge un procedimiento para el fallo de procedimientos por falta penal, que tras la desaparición de las faltas del Código Penal tras su reforma en 2015, la regla ha de referirse a los delitos leves. Sólo será aplicable durante el estado de sitio o en situación de conflicto armado dentro del ámbito del art 13³⁰ de la LOCOJM³¹. La competencia para conocer del mismo corresponde al Juzgado

²⁸ *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Págs 253 a 280.

²⁹ Art 398 de la LPM «Serán juzgados en juicio sumarísimo: 1.º Los procesados por flagrante delito militar incluidos los comprendidos en el artículo 9, apartado 2, párrafos a) y b) del Código Penal Militar, castigados con la pena de prisión cuyo límite mínimo sea igual o superior a diez años, teniendo en cuenta la pena que pudiera corresponder por el resultado lesivo conforme al Código Penal. 2.º Los procesados por delitos de que conozca la Jurisdicción Militar que afecten gravemente a la moral o a la disciplina de las Fuerzas Armadas o a la seguridad de las Unidades, plazas, buques, aeronaves o bases militares, y así se declare por el Gobierno (...)».

³⁰ En tiempo de guerra y en el ámbito que determine el Gobierno, además de lo dispuesto en el artículo anterior, la jurisdicción militar se extenderá a los siguientes delitos y faltas: 1. Los que se determinen en tratados con potencia u organización aliadas. 2. Los comprendidos en la legislación penal común, cuyo conocimiento se le atribuya por las leyes, por las Cortes Generales, o por el Gobierno, cuando estuviere

Togado Militar Central o Territorial de la demarcación en que hubieren ocurrido los hechos, puesto que entre su función se encuentra la instrucción y el fallo³² de los procedimientos por “falta común” que se corresponda a la Jurisdicción Militar.

Encontramos así también como procedimiento especial, el realizado contra los reos ausentes. Hemos de destacar que no es un procedimiento exclusivo, sino por el cual nos establece los requisitos para establecer la declaración de rebeldía o acordar la suspensión de un procedimiento que se venga instruyendo en caso de que el procesado no compareciese o no se hallase. El acusado tiene un deber jurídico de estar a disposición del Juez o Tribunal que conozca del proceso, convertible incluso en orden de detención en caso de no comparecencia (art 487 LECrim). Los efectos que produce la declaración de rebeldía dependen del momento procesal en que tenga lugar. El artículo 409 de la Ley Rituaria Militar confiere, en primer lugar, que si la rebeldía se produce durante la instrucción del sumario, se continuará con la instrucción hasta que se declare concluso por auto, suspendiéndose después su curso y archivándose los autos y piezas de convicción que pudieran conservarse y no se hallaren sujetas a restitución. Por tanto, no se permite abrir el juicio oral con el consiguiente escrito de conclusiones ni el sobreseimiento de las actuaciones. En segundo lugar, si la causa está pendiente de juicio oral, se procederá a la suspensión de la vista y se archivarán los autos, ya que se requiere ineludiblemente la presencia del acusado, en virtud del principio acusatorio³³.

14. El juicio oral y la sentencia

Tras la aprobación del auto de conclusión del sumario al Tribunal Militar se le abren dos posibilidades: acordar la apertura de juicio oral o proceder al sobreseimiento de las actuaciones.

Se acordará la apertura de juicio oral cuando concurran los siguientes presupuestos: que así lo solicite el Ministerio Fiscal o alguna de las partes acusadoras,

autorizado para ello. 3. Todos los tipificados en la legislación española, si se cometen fuera del suelo nacional, y el inculcado es militar español o persona que siga a las Fuerzas o Unidades españolas. 4. Todos los cometidos por prisioneros de guerra. A los efectos de esta Ley la locución «tiempo de guerra» se entenderá en los términos definidos en el artículo 14 del Código Penal Militar.

³¹ Memento Derecho Procesal Penal. Lefebvre El Derecho. 2018.

³² *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Págs 328 a 326.

³³ *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Pág 314.

que el Tribunal entienda que el hecho es constitutivo de delito y que alguien se encuentre procesado como responsable criminal del hecho investigado.

Una vez abierto el juicio oral, el Fiscal Jurídico Militar y el acusador particular deben formular su escrito de conclusiones provisionales. De igual modo deben actuar tanto la defensa como el actor civil. A través de los mismos se cumple con el derecho «a ser informado de la acusación formulada» del artículo 24.2 de la CE hacia el imputado.

Durante la celebración de la vista o juicio oral se desarrollará la actividad probatoria, que servirá al Tribunal para dictar su sentencia. Tras la práctica de la prueba, las partes deben informar al Tribunal si se ratifican en sus escritos de conclusiones provisionales, o si incluyen alguna modificación, formulando, en virtud del art 313 de la LPM, las conclusiones definitivas, sobre las que resolverá la futura sentencia. Las partes realizarán el informe oral en que basan sus conclusiones, que en función del art 314 de la LPM, han de consistir sobre los hechos probados, su calificación legal, la participación de los acusados, la pena a imponer y la responsabilidad civil contraída.

Posteriormente, el auditor presidente preguntará a los acusados si tienen algo que manifestar, lo que se conoce como «derecho a la última palabra». Esto supone que lo último que oiga el Tribunal, sean las manifestaciones del propio acusado, donde asume personalmente su defensa y que por su propia naturaleza no está sometida a debate entre las partes.

A través de la sentencia se pone fin definitivamente a la causa (art 84 LPM). El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas, las razones expuestas por acusación y defensa y lo manifestado por los acusados debe dictar sentencia en los términos y formas establecidos por la Ley (art 322 LPM). La firmeza de la sentencia producirá el efecto de cosa juzgada, que, según el art 3 de la LPM, *«no se procederá penalmente contra persona alguna por hechos por los que ya hubiese sido juzgada en un proceso penal anterior, en el que haya recaído sentencia firme o auto, también firme, de sobreseimiento definitivo y libre»*³⁴.

³⁴ *Manual básico de tribunales y procedimientos militares*. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017. Págs 357 a 376.

III. CÓDIGO PENAL MILITAR

1. Parte general

1.1 Aplicación del Código Militar

El Código Penal Militar será de aplicación a las infracciones que constituyan delitos militares. Las infracciones disciplinarias cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil se regirán por su legislación específica.

Se aplicará a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo en los siguientes supuestos: en tiempo de conflicto armado, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden y mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.

Los delitos militares son considerados especiales por la cualificación del sujeto activo y será de aplicación a todas las conductas realizadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil que en principio, se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la Sala 5ª del TS, a través de la teoría de la relación jerárquica permanente³⁵ permite extender su aplicación a situaciones que exceden del ámbito profesional.

No obstante, en situaciones críticas o de conflicto armado, el CPM podrá aplicarse a un ciudadano civil, comprobando minuciosamente que esos delitos en los que el sujeto activo es un civil, se circunscriben al ámbito de lo “*estrictamente castrense*”, como exige el Tribunal Constitucional.

En lo que atañe a la Guardia Civil, existe polémica por la aplicación a sus miembros del CPM, ya que éstos llevan a cabo funciones policiales y militares. La Guardia Civil, de naturaleza militar³⁶ no forma parte de las Fuerzas Armadas pero sí de

³⁵ Con independencia de todo conocimiento, el militar de empleo jerárquicamente más elevado siempre ha de ser tenido por superior, incluso en una disputa de carácter privado, puesto que mientras se es militar, el comportamiento de la persona está sometido a las normas que conforman tal status y no puede sustraerse a ellas por su propia voluntad. La condición de superior es permanente y de carácter objetivo, proyectándose fuera o dentro del servicio, de forma que el bien jurídico de la disciplina debe mantenerse como protegido en todo momento en las relaciones jerárquicas mientras se tiene la condición de militar, con independencia del momento o situación en que se produzcan los hechos enjuiciados y de la intención manifestada por los sujetos que intervienen en la realización de la conducta (SSTS, Sala 5ª, de 8 de octubre de 2001, de 5 de noviembre de 2004 y 9 de abril de 2013).

³⁶ Ley de Defensa Nacional.

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Están sometidos a la jurisdicción militar, ya sea en tiempo de conflicto armado, estado de sitio, misiones de carácter militar y mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas. No estarán sometidos cuando los hechos sean encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de las funciones policiales y se exceptiona para ellos, la aplicación de los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar, anteponiendo la naturaleza militar al carácter funcional como Cuerpo de Seguridad del Estado en su conformación básica, manteniendo el amplio margen competencial, cuantitativa y cualitativamente, de la jurisdicción militar.

Destacamos que cuando una acción u omisión constitutiva de delito militar sea más grave en el Código Penal, se aplicará dicho código por la Jurisdicción Militar.

1.2 Definiciones

El CPM hace necesaria una mención expresa a establecer definiciones de determinados conceptos que atañen al ámbito militar, y que se debe a la actualización de acuerdo a las exigencias de la legislación interna o internacional ratificada por España y las aportadas por la doctrina y la jurisprudencia, que es sobre lo que se fundamenta. Es notorio, puesto que la incorporación de definiciones en el ámbito penal es poco usual, y, en este caso, las definiciones a las que hacemos referencia presentan cierta complejidad en su delimitación y adquieren plena aplicabilidad en toda la legislación militar, especialmente, en el ámbito procesal y, concretamente, respecto de la delimitación de la competencia de la jurisdicción castrense.

Para RODRIGUEZ VILLASANTE, estas definiciones tienen el carácter de interpretación auténtica y sirven como criterios que delimitan la competencia de la jurisdicción militar. Sin embargo, GRANADOS CASTILLO, refiere que las definiciones son precisadas con carácter general, lo que obliga a acudir a otras normas para su completa delimitación. Así ocurre con “acto de servicio” o “enemigo”, entre otras.

Especial importancia recibe la categoría de “militar”³⁷, quien al momento de la comisión del delito posea dicha condición, de conformidad con las leyes relativas a la

³⁷ Artículo 2 del CPM: Son militares, a efectos de este Código, quienes al momento de la comisión del delito posean dicha condición, de conformidad con las leyes relativas a la adquisición y pérdida de la misma y, concretamente, con las excepciones que expresamente se determinen en su legislación

adquisición y pérdida de la misma³⁸ y, concretamente, con las excepciones que expresamente se determinen en la legislación específica. Recordamos que en base a la teoría jurisprudencial de la situación jerárquica permanente, se es militar las veinticuatro horas del día con el efecto subsiguiente en la comisión de un hecho delictivo, si bien con las excepciones mencionadas en el art 2 CPM.

1.3 Delito militar

Se consideran delitos militares las acciones u omisiones dolosas o imprudentes previstas en el Libro Segundo del Código Penal Militar. También son delitos militares cualesquiera otras acciones u omisiones cometidas por un militar y tipificadas en el Código Penal como Delitos de traición y delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado³⁹, o Delito de rebelión, en caso de conflicto armado internacional.

Especial complejidad se refleja en identificar y definir qué se entiende por bien jurídico militar. Conforme a la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la Sala 5ª del TS, los bienes jurídicos militares se materializan en tres conceptos: disciplina, jerarquía y cohesión.

Disciplina es un factor de cohesión y una norma de actuación que obliga a mandar con responsabilidad y obedecer lo mandado.

Jerarquía es la situación relativa entre los miembros de las FFAA en función del mando, subordinación y responsabilidad. Se basa en el respeto e implica la toma de decisiones

específica: 1.º Los que mantengan una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas o con la Guardia Civil, mientras no pasen a alguna situación administrativa en la que tengan en suspenso su condición militar. 2.º Los reservistas cuando se encuentren activados en las Fuerzas Armadas. 3.º Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar. 4.º Los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de la Guardia Civil. 5.º Quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio y normas de desarrollo. 6.º En las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, los capitanes, comandantes y miembros de la tripulación de buques o aeronaves no militares que formen parte de un convoy, bajo escolta o dirección militar, así como los prácticos a bordo de buques de guerra y buques de la Guardia Civil. 7.º Los prisioneros de guerra, respecto de los que España fuera potencia detenedora.

³⁸ LCM y Ley 8/2006 de Tropa y Marinería.

³⁹ Incluidas las disposiciones comunes, siempre que se perpetraren con abuso de facultades o infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

dar órdenes y cumplirlas, fortalecer la moral, motivar a los subordinados, mantener la disciplina y administrar los medios asignados.

Cohesión implica lealtad y compañerismo entre los miembros de las FFAA como expresión de solidaridad en el cumplimiento de las misiones.

Se deben proteger los intereses militares, la CE los reconoce como medios necesarios para garantizar no un principio de efectividad estrictamente militar, sino el principio de eficacia reconocido en el art 103 del texto constitucional adquiere mayor sentido y permite integrar, de manera razonable, la jerarquía, disciplina y unidad dentro de los presupuestos organizativos de la Administración del Estado.

El TS, en su sentencia de 7 de noviembre de 2006, establece que la disciplina, la jerarquía y la unidad de las Fuerzas Armadas *«no tiene que hacerse forzosamente por la vía penal cuando existen otras vías suficientes para asegurar el cumplimiento (de sus deberes)»*, por lo que el derecho disciplinario es un medio adecuado para proteger los intereses militares en numerosas ocasiones.

1.4 Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Se trasladan a la jurisdicción militar las causas de justificación y exclusión de la culpabilidad reguladas en el art 20 del CP, eliminando las causas de atenuación del art 21, de agravación del art 22 y la circunstancia mixta de parentesco del art 23, todas ellas del Código Penal. No obstante, el art 10 del texto castrense, considera circunstancia atenuante muy cualificada, la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquier actuación injusto que haya producido en el sujeto arrebató, obcecación u otro estado similar. La Sala 5ª del TS en sentencia de 20 de julio de 2016, fundamenta que la atenuante⁴⁰ disminuye la imputabilidad que causa en el inferior la alteración psíquica que le origina, momentáneamente, una provocación o actuación injusta del superior que ejerce desmedida y abusivamente la autoridad que le está atribuida. Por ello, sobre esta justificación y tomando como antecedente el art 36 del CPM de 1985, se construye una atenuante. Será aplicable a todos los delitos militares,

⁴⁰ Han de cumplirse unos requisitos, que se encuentran enumerados en SSTs de 16 de mayo de 1994, 17 de enero de 2014 y 18 de abril de 2016. Estos requisitos son: existencia de un acto previo de provocación o actuación injusta sin previa provocación por parte del autor del delito; que el autor de dicho acto sea superior jerárquico al provocado; proporción entre la provocación y la respuesta; respuesta inmediata sin retraso en el tiempo y que se produzca en el sujeto un estado pasional o emocional intenso.

sin embargo, se proyecta principalmente en delitos de insubordinación regulados en los artículos 42 a 44 del CPM.

De igual forma, en cuanto a las agravantes, matiza el concepto de reincidencia, cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito militar del mismo Título o por algunos de los previstos en el art 9.2 (delitos de traición y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y de rebelión, en caso de conflicto armado internacional regulados en el Código Penal), siempre que sean de la misma naturaleza.

1.5 Penas militares

Las penas principales que pueden imponerse por los delitos de este Código, sin perjuicio de las que correspondan por aplicación del Código Penal son penas graves⁴¹ y menos graves⁴². Se considerarán penas accesorias la pérdida de empleo, la suspensión militar de empleo y la revocación de ascensos.

Reciben la condición de penas principales la prisión, con una duración mínima de dos meses y un día y máxima de veinticinco años, sin perjuicio de las excepciones del CP; la pérdida de empleo, de carácter permanente, que supone para el sujeto la baja de las FFAA o la Guardia Civil, con privación de todos los derechos excepto los pasivos; la inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar; la suspensión militar de empleo que privará de todas las funciones propias del mismo durante el periodo; la pena de multa (aplicable conforme al CP) y, la pena de localización permanente, cumplida en el domicilio del condenado o en el establecimiento penitenciario designado por el Ministerio de Defensa. También serán consideradas penas principales aquellas que tengan esta naturaleza conforme al CP.

El legislador militar configura la prisión como pena grave cuando excede de tres años, estableciendo dos marcos temporales diferenciados cuando la califica de menos grave: de tres meses y un día a tres años, por un lado, y de dos meses y un día a tres meses, por otra. Existe un límite mínimo que posibilita el ingreso en un establecimiento

⁴¹ Prisión superior a tres años, pérdida de empleo, inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar.

⁴² (Prisión de tres meses y un día a tres años, prisión de dos meses y un día a tres meses, suspensión militar de empleo, de tres meses y un día a tres años, multa de dos a seis meses, la pena de localización permanente de dos meses y un día a seis meses).

penitenciario militar para cumplir una condena de muy escasa duración. Esto se reafirma por la íntima relación existente entre el Derecho Penal y el Derecho Disciplinario militar y la facultad del art 25.3 de la CE, en una interpretación del mismo, que confiere a la Administración militar para imponer sanciones que impliquen privación de libertad. El art 20 del CPM, establece la potestad de los Tribunales Militares de reducir la pena de prisión en uno o dos grados *«sin que, en ningún caso, pueda imponerse pena de prisión inferior a dos meses y un día»*. En cambio, en lo que al límite máximo se refiere, las dos únicas vías para sobrepasar el límite de veinticinco años de prisión en la esfera castrense son a través de la aplicación de los artículos 66.1.4º y 5º (con la limitación de 30 años previstas en el art 70.3.1º), y de los límites penológicos de 30 y 40 años que el art 76.1.b) y c) del CP que establece para los supuestos de concurso real de delitos.

En lo que atañe a la prisión permanente revisable, en principio no forma parte del CPM, pero podrá ser aplicada en la jurisdicción castrense en la medida en la que se sancione conductas a las que acompañe su aplicación. Por ello, la *vis* atractiva de la jurisdicción militar extiende su competencia a los delitos comunes que sean susceptibles de ser sancionados con penas más graves en el CP⁴³ así como delitos conexos a los delitos militares⁴⁴, y, con ella, la posibilidad de aplicar la prisión permanente revisable tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil.

En cuanto a la localización permanente, configurada únicamente como pena menos grave, con una duración de dos meses y un día a seis meses (art 11), se determina su cumplimiento, en virtud del art 12, *«conforme a lo previsto en el CP, en el domicilio del reo, o en su caso, en el establecimiento penitenciario designado por el Ministerio de Defensa»*. En la actualidad no ostenta naturaleza de pena principal en el Código Penal Militar, por ello, la vía por la que resulta aplicable viene dada por el artículo 21, es decir, cuando la pena establecida en el Código Penal para los delitos militares sea la de trabajos en beneficio de la comunidad.

El Código Penal Militar, en su artículo 13, establece que la pena de multa se regirá por lo establecido en el Código Penal. Sin embargo, puesto que no se contempla en el texto

⁴³ Art 12.1 de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y art 1.3 del CPM.

⁴⁴ Art 14 de la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

castrense la responsabilidad subsidiaria por impago de multa no pueden aplicarse los términos por los que se rige el CP, y en consecuencia no puede hacerse efectiva la pena de localización permanente.

La pérdida de empleo constituye tanto pena principal de naturaleza grave (art 11 CPM) como pena accesoria para los militares condenados a pena de prisión que exceda de tres años (art 15 CPM), con la consecuencia de la baja obligatoria del penado en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil. Esta no es la consecuencia jurídica que determina el cumplimiento de la pena de prisión de un militar en un establecimiento penitenciario ordinario, puesto que la baja de las Fuerzas Armadas a la que hace referencia el artículo 12.2 del texto castrense, debe ser consecuencia de la privación de libertad impuesta por un delito común. Es decir, aún cuando el militar haya causado baja en las Fuerzas Armadas, como consecuencia de la imposición de la pérdida de empleo, cumplirá condena en un establecimiento penitenciario militar. En cambio, cuando el delito común lleve aparejada como pena principal o accesoria la pena de inhabilitación, será destinado a un establecimiento penitenciario ordinario.

La pena de muerte en 1945 formaba parte del catálogo de penas vigentes, pero con la entrada en vigor de la CE, que reconocía el derecho a la vida, se adoptaron pautas penológicas que abolían la pena de muerte en tiempos de paz y, mantenía su aplicación en tiempos de guerra. En la actualidad, encontramos en la CE en su art 15 referencia a ella «*Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra*». Se aprobó el Decreto-ley 45/1978, de 21 de diciembre, que sustituía la pena de muerte del Código de Justicia Militar por la pena de 30 años de reclusión, y la LO 9/1980, de 6 de noviembre, que modificó el art 209 del texto castrense que indicaba que «*la pena de muerte sólo podría imponerse en tiempos de guerra*». Con ello, inicialmente, el CPM de 1985 también preveía la aplicación de esta pena en tiempos de guerra. Finalmente, la Ley 11/1995, de 27 de noviembre, suprime la pena de muerte y la elimina del sistema de penas militares del CPM de manera definitiva. Sin embargo, la CE no se ha modificado y continúa con la posibilidad de establecer la pena de muerte en situaciones de guerra.

1.6 Penas accesorias

De acuerdo al art 15 del CP, los militares que cumplan pena de prisión superior a tres años, además, llevarán consigo la accesoria de pérdida de empleo y la de prisión de menor duración, la accesoria de suspensión militar de empleo.

En el caso de militares condenados a una pena de prisión que exceda de seis meses por delito doloso, el Tribunal podrá imponer la pena accesoria de revocación de los ascensos al empleo o empleos que haya alcanzado el condenado desde la comisión de los hechos calificados como delictivos en la sentencia hasta la fecha de la firmeza, motivándolo expresamente en la sentencia conforme a los criterios de individualización contenidos en el art 19 del CPM.

1.7 Cumplimiento de las penas

La pena de prisión tendrá con carácter general una duración mínima de dos meses y un día y máxima de veinticinco años. Será cumplida en establecimientos penitenciarios militares⁴⁵ designados por el Ministerio de Defensa, excepto si se trata de un delito común que conlleve la baja en las FFAA o en la Guardia Civil, que se hará en un establecimiento penitenciario ordinario.

La pena de localización permanente será cumplida en el domicilio del reo o en el establecimiento penitenciario designado por el Ministerio de Defensa.

Para la situación de conflicto armado, las penas privativas de libertad impuestas a militares podrán ser cumplidas en la unidad de su destino y en cometidos que el mando militar designe, en atención a las exigencias de la campaña y de la disciplina, previa comunicación y aprobación del órgano judicial actuante.

2. Parte especial

Los bienes protegidos aquí han de ser estrictamente castrenses en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las FFAA, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar.

⁴⁵ Sin perjuicio de su condición de instituciones penitenciarias, serán unidades de las Fuerzas Armadas, que se acomodarán a la estructura, organización y régimen general de dichas unidades.

Anteriormente, con el CPM de 1985 se tipificaban ciento cuarenta y nueve delitos. Se redujeron a sesenta y dos, en base a dos criterios⁴⁶: por un lado, “*tipificar únicamente los ilícitos penales específicamente militares con una tipificación precisa, respetuosa con el principio de legalidad y taxatividad*” debidamente depurada y actualizada y, por otro, “*evitar problemas de alternatividad y enojosas repeticiones*” debido a que la conducta podía estar recogida tanto en el CPM como en el CP.

En la actualidad observamos sesenta y dos figuras delictivas militares, agrupadas en cinco títulos: Delitos contra la seguridad y defensa nacionales, Delitos contra la disciplina, Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, Delitos contra los deberes del servicio, y Delitos contra el patrimonio militar.

2.1 Delitos contra la seguridad y defensa nacionales (arts 24 a 37)

La ubicación de estos delitos aquí se corresponde con una determinada representación jerárquica de los bienes jurídicos militares. Son conductas graves contra la propia patria y delitos con mayor trascendencia en el ámbito militar. Son un número amplio de delitos y de distinta naturaleza, lo que hace a veces difícil la conexión del bien jurídico protegido con las distintas figuras delictivas.

Los delitos que aquí encontramos son: traición militar (art 24), espionaje militar (art 25), revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales (art 26), atentados contra los medios o recursos de la seguridad o defensa nacionales (art 27, 28 y 29), incumplimiento de bandos militares en situación de conflicto armado o estado de sitio (art 30), delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada o policía militar (art 34) y ultrajes a España e injurias a la organización militar (art 36 y 37).

2.2 Delitos contra la disciplina (arts 38 a 48)

La disciplina militar es imprescindible junto con la jerarquía y la unidad. Es un factor de cohesión de las FFAA y una norma básica de actuación del militar. Es

⁴⁶ Exposición de motivos del CPM.

considerada indispensable para lograr la máxima eficacia del militar a la hora de desarrollar sus funciones⁴⁷.

Encontramos aquí tres figuras delictivas: sedición militar (art 38 a 41); insubordinación, que a su vez se integra por insulto a superior (art 42 y 43) y desobediencia (art 44) y, abuso de autoridad (art 45 a 48).

Cada uno de ellos se orienta hacia un tipo concreto de comportamiento indisciplinado: manifestaciones colectivas de indisciplina o conductos de indisciplina de carácter individual. En algunos de estos delitos se puede lesionar algún bien jurídico sin carácter militar, como pudiera ser los bienes jurídicos personalísimos.

2.3 Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares (art 49 y 50)

Se incluyen las conductas que lesionan un conjunto heterogéneo de bienes jurídicos personalísimos. En concreto, el artículo 49 protege la integridad física y moral y la libertad sexual, mientras que el artículo 50 la libertad sexual, el honor y la intimidad. Este último artículo incluye una cláusula que permite castigar la limitación arbitraria de los derechos fundamentales o libertades públicas de los militares y guardias civiles en sentido amplio y cualquier acto que suponga un comportamiento discriminatorio.

Sin embargo, aunque se hayan incluido los mencionados artículos, la Sala 5ª del TS acepta que existen delitos pluriofensivos, donde los resultados lesivos que se producen a los bienes jurídicos protegidos son derivados al CP, y lo que se castiga *de facto* es la afección a la disciplina, unidad y jerarquía que pueden suponer las conductas recogidas en ambos tipos.

2.4 Delitos contra los deberes del servicio (arts 51 a 80)

Es el Título más extenso de todos. El bien jurídico protegido aquí es el servicio o el correcto desarrollo de las funciones que corresponden a cada militar en el cumplimiento de sus específicos cometidos.

⁴⁷ Arts 7 y 8 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y artículo 6.1 de la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas.

Encontramos ocho delitos, que son: cobardía (art 51 a 54); deslealtad (art 55); delitos contra los deberes de presencia y prestación del servicio, que son: abandono de destino o residencia (art 56), desertión (art 57), quebrantamientos especiales del deber de presencia (art 58), inutilización voluntaria y simulación para eximirse del servicio (art 59); delitos contra los deberes del mando, compuesto por incumplimiento de deberes inherentes al mando (art 61 a 65), y extralimitaciones en el ejercicio del mando (art 65 y 66); quebrantamiento de servicio, donde se incluyen el abandono de servicio (art 67), delitos contra los deberes del centinela (art 68 y 69), embriaguez e intoxicación por drogas tóxicas en actos de servicio (art 70); delitos de omisión del deber de socorro (art 71 y 72), delitos contra la eficacia del servicio (art 73 a 78) y delitos contra otros deberes del servicio (art 79 y 80).

2.5 Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar (arts 81 a 85)

Este tipo de delitos encuentra su justificación en la necesidad de «*preservar la probidad y seriedad del militar en la gestión de los intereses económicos y administrativos que le pudieran ser encomendados*»⁴⁸.

Estos tipos delictivos son la mayoría casos de defraudaciones o malversaciones, pero que no se corresponden con los existentes en el CP, por lo que son autónomas e independientes las conductas que encontramos con respecto al texto común.

Destacamos la tipificación del incumplimiento del contrato en caso de conflicto armado o estado de sitio cuando resulten afectados los intereses de la defensa nacional, una conducta que convierte una infracción en delito, como es el incumplimiento contractual, y que debería castigarse mediante la norma administrativa.

IV. DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR

El Derecho disciplinario militar distingue dos posiciones. Para ello, ROJAS CARO⁴⁹, hace una síntesis de estas posiciones doctrinales principales.

⁴⁸ Sentencia de la sala 5ª del TS, de 14 de noviembre de 1994.

⁴⁹ FERNÁNDEZ MUIÑOS B., El cambio normativo en el Derecho Disciplinario Militar. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4643228.pdf>, en internet (Consultado el 28 de julio de 2017).

Por un lado, aquéllos que creen que existe una diferencia cualitativa entre un ilícito penal y administrativo. Para éstos, el ilícito penal conlleva el ataque de bienes jurídicos y el administrativo, un ataque de normas. El ilícito penal implica una lesión efectiva o peligro real sobre el bien jurídico, en cambio, el administrativo un peligro o posibilidad de peligro. Por último, el penal protege bienes jurídicos y el administrativo, intereses administrativos.

Por otro lado, los que creen en una diferencia cuantitativa. Centran la diferencia en el desvalor social, siendo de mayor gravedad el ilícito penal. Será el legislador el que decida dentro de los marcos constitucionales a cuál debe pertenecer.

Distinción necesaria también sobre el Derecho disciplinario y el Derecho sancionador militar. Un sector de la doctrina opta porque ambos van unidos. En cambio, otro sector incluye las sanciones del incumplimiento de las obligaciones disciplinarias, y las recompensas por su cumplimiento en el Derecho disciplinario, y, por otro lado, las sanciones, procedimientos y principios en el Derecho sancionador.

La Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas dedica su Título I a las faltas y sanciones.

Son faltas disciplinarias las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes. Se dividen en leves, graves y muy graves. Cuando se cometa una falta, dará lugar a la imposición de la sanción correspondiente.

Los artículos 6, 7 y 8 dedican un extenso listado sobre qué se considera falta en la condición de leve, grave o menos grave.

Las sanciones vienen establecidas en el artículo 11, y, seguidamente se detallan las sanciones en particular. Hallamos sanciones tales como la represión, la privación de salida, la sanción económica, el arresto, la pérdida de destino, la suspensión de empleo, etc.

V. DERECHO PENITENCIARIO MILITAR

1. Contenido de la actividad tratamental

El fin primordial del sistema penitenciario es el éxito del tratamiento, para conseguir la rehabilitación y reinserción social de los penados. El derecho castrense, se inspira en lograr la reeducación, ya sea a través de la reincorporación militar del que deba retornar al servicio activo en las Fuerzas Armadas o reinsertando al que no deba incorporarse al ejército, en el caso de que los reclusos hayan sido condenados porque con reclusos preventivos solo cabe su retención y custodia bajo el principio de presunción de inocencia.

En todo caso, las actividades regimentales serán un medio y no un fin en sí mismas, puesto que la finalidad primordial del régimen es lograr el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento. Existirán tres grados de tratamiento. Anteriormente, el tercer grado correspondía a la libertad condicional. Antes era una modalidad de cumplimiento o ejecución de la pena privativa de libertad, pero tras la reforma de la LO 1/2015, se configura como una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena.

En el ámbito penitenciario castrense también se sigue el modelo de individualización científica separado en grados de tratamiento⁵⁰.

1.1 Separación y clasificación

Una vez que llega un detenido o preso a prisión, permanecerá en el departamento de ingresos hasta su destino en módulo y sección que corresponda. Deberá ser examinado por el médico a la mayor brevedad y entrevistado por el trabajador social con el fin de detectar sus carencias y necesidades. Los profesionales elaborarán un informe y una planificación educativa, sociocultural y deportiva, y de actividades de desarrollo personal y la Junta de Tratamiento, de acuerdo con dicho informe y valorando diversos aspectos, elaborará un modelo individualizado de intervención. Se hará una propuesta de destino⁵¹

Los sentenciados, recibirán el tratamiento propiamente dicho. Una vez reconocidos por el médico, si son de nuevo ingreso, permanecerán el tiempo suficiente para que los profesionales formulen una propuesta de inclusión en uno de los grupos de

⁵⁰ Artículo 72.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 31 del Reglamento Penitenciario.

⁵¹ Artículo 33 del Reglamento Penitenciario.

separación interior y se ordene por el Director el traslado al Departamento que corresponda, previo informe médico, que en todo caso debe emitirse. Así, la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo técnico, formulará un programa individualizado de tratamiento que habrá de tenerse en cuenta para el momento de la liberación.

El Reglamento en su artículo 22 establece que:

«Los establecimientos penitenciarios militares se dividirán en distintos pabellones, secciones, unidades o departamentos, atendiendo al sexo, estado de salud, condición o categoría militar, detenidos y preventivos o penados y dentro de éstos, en razón al grado de tratamiento. La separación según la condición o categoría militar podrá exceptuarse por motivos de seguridad y buen orden del establecimiento, la finalidad del tratamiento y la adecuación de su conducta a las exigencias de la condición militar, dando cuenta al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria».

Esto da lugar a distintas estancias en pabellones en función de la categoría: oficial, suboficial o tropa. Así, también existe una distinción en cuanto a los jóvenes, siendo estos los menores de veintiún años⁵² aunque podrán permanecer en las unidades de jóvenes los menores de veinticinco años. No obstante, las actividades que sean compatibles podrán realizarse en común.

Existirá una separación, prevista en el artículo 16 de la LOPG, que además recoge la emotividad y las exigencias del tratamiento⁵³. Encontramos la siguiente clasificación de aplicación directa en el ámbito castrense: con carácter general debe existir separación cierta entre hombres y mujeres; los detenidos y presos separados de los condenados y, en ambos casos, los primarios de los reincidentes; jóvenes, separados de los adultos, independientemente sean detenidos, presos o penados; los enfermos o con deficiencias físicas o mentales separados de los que sigan el régimen normal del establecimiento y los detenidos por delitos dolosos han de estar separados de los que hayan realizado uno o varios delitos imprudentes.

En lo que se refiere a la separación, existe una evolución del sistema progresivo de separación en grados. El primer grado, que será excepcional, se cumplirá en régimen cerrado; el segundo grado, en régimen ordinario, es el régimen general de cumplimiento y, el tercer grado, si ha lugar, en régimen abierto. No debemos olvidarnos de la libertad

⁵² Artículo 9.2 de la LOGP.

⁵³ La LOPG, en este sentido, señala un protocolo de personalidad y dado que sólo se indica que tiene derecho a ser informado con respecto al expediente personal, relativo a su situación personal y penitenciaria, entendemos que tiene un carácter reservado o al menos limitado para el propio interno, no así para los Equipos Técnicos y la Junta de Tratamiento, en su caso.

condicional, que para obtenerla es necesario cumplir los requisitos establecidos en el artículo 90 del CP.

Cumplirán las penas en régimen excepcional cerrado los penados que, por ser calificados de peligrosidad o aquellos cuya conducta sea calificada de inadaptación extrema al régimen penitenciario ordinario o abierto, se les clasifique en primer grado de tratamiento.

La calificación de peligrosidad o inadaptación se ajustará a lo dispuesto en la legislación común respecto a los factores valorables para su apreciación y revisión de la resolución clasificadora.

El artículo 32 del RPM añade que el primer grado corresponde a los penados de extrema peligrosidad o supuestos de conductas delictivas calificadas de inadaptación extrema al régimen penitenciario ordinario o abierto, debiéndose medir tal peligrosidad, entre otras, por inadaptación a factores objetivos, tales como: pertenencia a organizaciones delictivas, participación como inductor o autor de motines, violencias físicas, amenazas, coacciones a funcionarios o internos, negativas injustificadas a conducciones, traslados o número y cuantía de condenas y penas graves en el periodo inicial de cumplimiento. Además, aquellas conductas que atenten especialmente a los principios de la institución militar o la unidad, jerarquía y disciplina serán valoradas especialmente.

El segundo grado viene reflejado en el artículo 33, es el régimen general de cumplimiento de las condenas o régimen ordinario. Es la regla general en la clasificación de los internos. Es aplicable de forma subsidiaria a los detenidos y presos. Aquí existen actividades preceptivas, optativas y de tiempo libre.

El tercer grado viene determinado por ser el régimen abierto o semilibertad. En éste cumplirán las penas los penados que ostenten el tercer grado bien por una evolución favorable en segundo grado. Es preceptivo que el penado haya cumplido la cuarta parte de la totalidad de su condena o condenas, excepto que concurran favorablemente clasificadas otras variables intervinientes en el proceso de clasificación, como la primariedad delictiva, buena conducta y madurez o equilibrio personal. Aquéllos que reúnan la condición de militar, les será valorable la integridad, responsabilidad, ejemplariedad y honradez.

Para pasar progresivamente de un grado a otro, los penados deberán observar buena conducta global, lo que se traduce en la aplicación en el trabajo, en las enseñanzas que se desarrollen y en la instrucción militar que se programa para los militares de reemplazo. Corresponde al Director del establecimiento decidir el paso o retroceso de un grado de a otro, conforme a los expedientes personales y fichas clasificadoras, previo informe del Equipo de Observación y Tratamiento y del Jefe de Área Interior⁵⁴. Se tendrá en cuenta la evolución penitenciaria militar en orden a su reinserción social o reincorporación en las FFAA.

En materia de clasificación ha de tenerse en cuenta que para las penas privativas de libertad superiores a cinco años de prisión, no se puede clasificar al penado en tercer grado hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena. También existe el requisito de satisfacer la responsabilidad civil⁵⁵.

Si bien es cierto que existe cierta flexibilidad gracias al artículo 100.2 del RP concediendo la posibilidad al Equipo Técnico de proponer a la Junta de Tratamiento un modelo específico en la Ejecución en el que puedan combinarse los aspectos característicos de los diferentes grados, siempre que se fundamente un programa específico de tratamiento y, siendo por otro lado una medida excepcional, que deberá ser aprobada por el Juez de Vigilancia sin perjuicio de su inmediata ejecución. Esta práctica es llevada a cabo en el EPM de Alcalá de Henares, donde suele realizarse un modo de tercer grado restringido para aquellos internos que siendo acreedores de la progresión no procede concederles un régimen abierto.

1.2 El tratamiento

El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados⁵⁶.

El método en el que será basado viene reflejado en el art 35 del RPM, a saber:

⁵⁴ Art 31.4 del RPM.

⁵⁵ Considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición).

⁵⁶ Art 59.1 LOGP.

«Para la consecución de la finalidad de reeducación de los internos en orden a su reinserción social, o en su caso, a su reincorporación a las Fuerzas Armadas, la Administración Penitenciaria Militar:

a) Diseñará programas de tratamiento orientados a desarrollar las aptitudes y actitudes de los internos, mejorar sus capacidades formativas, técnicas o profesionales y compensar sus carencias.

b) Utilizará las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar sus capacidades y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior.

c) Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior, teniendo en cuenta la evolución en el tratamiento. Estos contactos se realizarán siempre que sea posible utilizando recursos de las Fuerzas Armadas».

Algunos autores, como ZAFRA RIASCOS⁵⁷ apuntan que existe una sola institución que es la unión de sistema y tratamiento, puesto que no quedan claramente separadas las actividades propias del tratamiento con las del régimen. Así, el artículo 5 del RPM, formulaba “El régimen de los establecimientos penitenciarios militares tendrá como finalidad conseguir una convivencia ordenada que permita el cumplimiento de los fines previstos por la legislación procesal penal para los detenidos y presos y llevar a cabo el tratamiento respecto a los penados”.

Para CLEVER VALDERAS⁵⁸, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares adopta por imperativo de la Ley procesal militar, los principios del régimen penitenciario común, que incorpora un sistema de cumplimiento de la pena basado en el tratamiento del penado, que no tiene que ver con el cumplimiento íntegro de una pena de prisión con un fin disciplinario.

Así, ZAFRA RIASCOS⁵⁹ señala que el tratamiento penitenciario como instrumento del sistema progresivo o de individualización científica es el logro más importante que se ha conseguido para aproximar la legislación militar con la normativa común.

⁵⁷ ZAFRA RIASCOS, M. *La aplicación del moderno sistema progresivo o de individualización científica en el ámbito penitenciario militar*: Derecho Penal y Procesal Militar. Consejo General del Poder Judicial. 1993, pág 781.

⁵⁸ CLEVER VALDERAS, J.M. *Comunicación, aplicabilidad de penas por el trabajo a los internos en establecimientos penitenciarios militares*. Derecho penal y Procesal Militar. Consejo General del Poder Judicial. 1993, pág 764.

⁵⁹ ZAFRA RIASCOS, M. *La aplicación del moderno sistema progresivo o de individualización científica en el ámbito penitenciario militar*: Derecho Penal y Procesal Militar. Consejo General del Poder Judicial. 1993, pág 775.

En opinión de JIMENEZ VILLAREJO⁶⁰, el aparato sancionador del Derecho penal militar no se orienta a la recuperación de los ciudadanos, aunque no se puede perder dicha orientación en base al art 25.2 CE, y por ello la pena ha de ostentar una función predominantemente ejemplificadora.

Por último, MAPELLI CAFFARENA⁶¹, considera que es un conjunto de medios psicotécnicos de condicionamiento de la conducta individual con fines de desarrollar en el interno comportamientos sociales y de acuerdo a las normas jurídicas, en el ámbito militar, preparar al interno para su ulterior reincorporación al servicio activo en su Cuerpo de procedencia, posibilitando su reinserción social si se da el caso de su incorporación a la sociedad civil y dejando para el derecho punitivo los efectos ejemplarizantes de las penas.

2. Contenido de la actividad regimental

2.1 Actuaciones iniciales

Las actividades regimentales son aquéllas que realiza la Administración para el buen éxito del tratamiento, garantizar la custodia de los internos y conseguir una convivencia ordenada dentro del centro.

Del contenido de los artículos 5 del RPM, 15.2 de la LOGP en la que debe inspirarse el sistema penitenciario castrense y del art 18 del RP, de aplicación subsidiaria en todo lo no previsto, podemos señalar que con motivo del ingreso de un interno en un Establecimiento Penitenciario Militar se producen estas actuaciones: cacheo del interno y registro de sus efectos, retirando lo no autorizado; adopción de medidas de higiene personal, verificación de su identidad personal, inscripción en libro de registro de ingresos, apertura de un expediente personal, formación de un protocolo de personalidad y entrega de un folleto informativo al interno con sus derechos, deberes y normas.

⁶⁰ JIMÉNEZ VILLAREJO, J. *El cumplimiento de las penas privativas de libertad en el ámbito militar*. Ponencia desarrollada en la III jornada de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria. 18-20 septiembre 1991.

⁶¹ MAPELLI CAFFARENA, B. *Sistema progresivo y tratamiento*. Lecciones de derecho penitenciario. Reimpresión. Ponencias presentadas en las primeras jornadas de Derecho Penitenciario. Facultad de Derecho, ICE, mayo 1984, autor citado por ZAGRA RIASCOS, M., en la obra citada en nota 98, pág 777.

2.2 Tiempo y lugar

Ha de cumplirse un horario y además se garantizará que el tiempo de descanso nocturno sea de ocho horas diarias, quedando atendidas las necesidades espirituales y físicas, sesiones de tratamiento y actividades formativas, laborales y culturales de los internos. Igualmente se determinarán las horas destinadas al tiempo libre.

El trabajo tendrá la consideración de actividad básica en el establecimiento y existirán actividades tendentes a evitar la inactividad tales como la formación militar, actividades culturales, deportivas o recreativas.

No debemos olvidar que existen actividades preceptivas para el interno, tales como las prestaciones necesarias para el buen orden, limpieza e higiene del establecimiento. Son de cumplimiento obligatorio y en caso de no ser así, pueden existir consecuencias disciplinarias, a diferencia de las actividades voluntarias o la no participación en el tratamiento.

En los Establecimientos Penitenciarios Militares los internos ocuparán una celda o habitación individual asignada en la sección o unidad a que pertenezcan.

Se prevé una separación para los penados en primer grado, preventivos incomunicados y los sancionados con aislamiento.

Si por razones de espacio deben hacer uso de dormitorios colectivos, por insuficiencia de alojamientos individuales o por indicación del médico o del Equipo de Observación y Tratamiento, se cuidarán especialmente la selección de internos que hayan de ocuparlos.

2.3 Comunicaciones, visitas y recepción de paquetes

El interno podrá mantener comunicaciones orales, especiales, escritas y telefónicas, así como con abogados, procuradores, autoridades y profesionales. También dispondrá de un servicio de recepción o envío de paquetes y encargos. Todo ello se registrará por lo establecido en el Reglamento Penitenciario común.

Será el Director del Establecimiento quién fije el horario en los que se produzcan las comunicaciones con familiares y otras personas, siendo preferente la comunicación

con familiares de primer grado o persona con análoga relación afectiva, y, se realizarán en un lugar adecuado destinado al efecto.

Cabe destacar que en determinados supuestos y por razones de seguridad, algunas comunicaciones pueden ser suspendidas en resolución motivada, dando cuenta al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria para los penados o a la autoridad judicial de la que dependan en caso de detenidos y presos.

Las comunicaciones con el abogado y procurador que le representen, no podrán ser intervenidas o suspendidas, salvo por orden expresa de la autoridad judicial.

2.4 Régimen disciplinario y recompensas

Está encaminado a garantizar la seguridad y el buen orden regimental para conseguir una convivencia ordenada, de manera que se estimule la responsabilidad el interno y su capacidad de autocontrol, para la realización de los fines de la actividad penitenciaria. Serán aplicables las normas del régimen disciplinario del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en materia de infracciones y sanciones.

Se aplicará a los internos durante su estancia en el centro, así como en los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen.

No será aplicable a los internos de Unidades psiquiátricas⁶², debido a que el interno ingresado con problemas psíquicos no podría comprender la ilicitud de un hecho o actuar conforme a su comprensión, por lo que no se puede exigir responsabilidad disciplinaria en actos que pudiera cometer.

Las sanciones que podemos encontrarnos son: aislamiento en celda, que no podrá exceder de catorce días; aislamiento de hasta siete fines de semana; privación de permisos de salida por un tiempo que no podrá ser superior a dos meses; limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiempo previsto reglamentariamente, durante un mes como máximo y privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo y, amonestación.

Encontramos que las únicas especialidades castrenses relativas a la materia disciplinaria son: atribución al Director del EPM de un mayor protagonismo que un

⁶² Las disposiciones del régimen disciplinario contenidas en este Reglamento no serán de aplicación a los pacientes internados en estas instituciones, en virtud del artículo 188.4 del RP.

Director de un Centro Penitenciario Común; que las sanciones no recurridas ante el Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria, podrán ser anuladas o disminuidas por el Subsecretario de Defensa, cuando se aprecie que la sanción impuesta no se ajusta a derecho (se haya cumplido o no) y, que las sanciones impuestas en vía disciplinaria lo serán sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria militar, siempre que sea compatible.

Las recompensa es un estímulo material a la buena conducta o laboral desarrollada por el interno, pero no supone un acortamiento de su libertad. Corresponde su aprobación al Director del EPM. Se pueden otorgar ya sea por buena conducta, espíritu de trabajo, sentido de responsabilidad en el comportamiento del interno o cualesquiera otras circunstancias objetivas o subjetivas que pongan de manifiesto el carácter ejemplar de la conducta recompensada. Las mismas consisten en comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales, notas meritorias, donación de libros, prioridad en la participación de salidas programadas, etc.

2.5 Situaciones anómalas

Se producen cuando se altera el normal funcionamiento del Establecimiento Penitenciario Militar. Esto es: motines, toma de rehenes, actos de evasión, violencia física, resistencia activa o pasiva al cumplimiento de órdenes y daños graves.

El TC señala terminantemente que «los poderes específicos que la Ley atribuye a la Administración Penitenciaria para prevenir y eliminar alteraciones del régimen disciplinario y también para sancionar administrativamente las infracciones de dicho régimen que puedan cometer los internos (SSTC 74/1984, 2/1987, 190/1987, 161/1993, 229/1993, 297/1993 y 129/1995) vienen limitados por los derechos fundamentales de los mismos y sus actos no están exentos de un control judicial “habida cuenta de las garantías establecidas en el art. 9.3 C.E., y las fijadas en el art.106.1 de la misma C.E.” (SSTC 73/1983 y 129/1995)».

Los actos mencionados anteriormente deben dar lugar a la adopción de medidas administrativas urgentes, que serán ejecutivas. Se ha de dar cuenta al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria y a las demás autoridades judiciales de que dependen los internos.

Se podrá hacer uso de medios coercitivos, en aplicación de casos de urgencia⁶³, comunicándose inmediatamente al Director que lo pondrá en conocimiento del Juez

⁶³ Motín, agresión física con arma u otro objeto peligroso, toma de rehenes o intento de fuga.

Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria inmediatamente; aislamiento en celda; traslado a otro Departamento distinto al que ocupa el interno involucrado⁶⁴; pase a régimen cerrado en casos de violencia extrema o inadaptación al régimen ordinario; intervención, suspensión o interrupción de las comunicaciones; intervención de las Fuerzas de Vigilancia Exterior o cualquiera de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en caso de alteraciones graves regimentales del orden del establecimiento por decisión del Director, asumiendo el Jefe de la fuerza interviniente la dirección del establecimiento en lo que atañe a la custodia, vigilancia y restauración del orden, asumiendo el Director las competencias restantes en base al art 25 del RPM.

2.6 Actuaciones finales

Se encuentran aquí todas las actuaciones que va a desarrollar la Administración Penitenciaria Militar cuando se produzca la liberación de los internos a través del mandamiento de libertad (en el caso de detenidos y presos) o en su caso, por no haber recibido éste en el plazo de 72 horas desde su ingreso, y en el caso de los penados, por el cumplimiento de la sentencia.

El RPM señala terminantemente en el 28:

«La libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por la autoridad u órgano judicial competente, los cuales librarán al Director del establecimiento el mandamiento necesario para que aquélla tenga lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento».

Cuando en el plazo de 72h desde el ingreso no se reciba orden o mandamiento judicial, el Director debe poner inmediatamente en libertad al sujeto, pues se lo debe comunicar a la autoridad que ordenó el ingreso y el órgano judicial a cuya disposición fue puesto. Es importante que no se supere el plazo de las 72h, pues de lo contrario se consideraría ilegal.

Una vez recibido el mandamiento y comprobado que el sujeto no ostenta ninguna otra responsabilidad, se procederá a su puesta en libertad, dejando constancia de las actuaciones, haciendo entrega de sus enseres y los documentos que fueren necesarios por su liberación.

⁶⁴ Lo adecuado sería el traslado a otro centro penitenciario, sin embargo, y ya que únicamente existe un Establecimiento Penitenciario Militar, situado en Alcalá de Henares, se ha de trasladar a otro Departamento distinto. La situación cambiaría con la creación de otro Establecimiento Penitenciario Militar.

3. El trabajo

En lo que se refiere al ámbito militar lo encontramos reflejado en el artículo 42 del RPM.

Se considera trabajo ocupacional el que realicen los internos comprendido en alguna de las siguientes modalidades: formación profesional, dedicadas al estudio y formación académica, prestaciones personales en servicios auxiliares del establecimiento, artesanales, intelectuales y artísticas. A diferencia del común, el militar no incluye las ocupacionales que formen parte de un tratamiento ni la producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares de acuerdo a la legislación vigente. Tampoco incluye la legislación castrense que el trabajo sea remunerado.

La exclusión del trabajo que forma parte de un programa individualizado de tratamiento se deberá a que esta actividad tratamental ha de tener correspondencia con la finalidad educativa que persiga. Tendrá significado cuando el militar recluso deba volver a las FFAA después del cumplimiento de la sentencia, y dado que el trabajo militar ya existe, el paso por la prisión militar tendrá una finalidad reeducadora pero no formativa de hábitos laborales. En consecuencia, para el militar que deba volver al servicio activo tendrá carácter formativo y sólo vendrá obligado a cumplir las prestaciones personales necesarias para el buen orden, limpieza e higiene del establecimiento.

En lo que se refiere a la retribución del trabajo, debemos recordar que el EPM se considera una unidad militar y se acomoda a la estructura y régimen general de dichas unidades. La retribución por tanto, pudiera distorsionar con el régimen militar que impide trabajar por cuenta propia o ajena a quien se encuentra en servicio activo, pudiendo incurrir en responsabilidad. Por ello, no tiene sentido que se fomente en los internos que deban incorporarse a las FFAA un espíritu incompatible con el trabajo que desempeñarán a su vuelta. Por todo ello se excluye así el trabajo productivo.

En cuanto al militar que no deba volver a las FFAA, no hay razones en principio para excluir de la consideración de trabajo al que forme de un tratamiento o al productivo, por lo que se produce una problemática con el contenido del art 25.2 CE que establece que el condenado tendrá derecho a un trabajo retribuido, sin distinguir entre penados civiles y militares. Debería aplicarse entonces a los internos que no deban

reincorporarse a las FFAA para garantizar la actividad reeducativa, que en este caso se limitará a la reinserción social de acuerdo al art 2 RPM.

De conformidad con lo expuesto, el art 42.3 del RPM, expresa que «*el trabajo penitenciario, que constituye un derecho y un deber del interno, tendrá carácter formativo...*», omitiendo que el trabajo es un elemento fundamental del tratamiento que recoge la LOPG en su art 26.

Estimamos que el trabajo solo tendrá la consideración de deber para el penado, mientras que para el preso o preventivo será voluntario.

El trabajo no tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida de corrección, tampoco podrá afectar a la dignidad del interno y se organizará en base a las aptitudes y aspiraciones del interno en lo que sea posible, deberá ser facilitado por la Administración, que además no suspenderá al logro de intereses económicos y en su ejercicio, los internos estarán amparados por las prestaciones del Régimen Especial de Seguridad Social de las FFAA.

4. Los permisos de salida

A diferencia del régimen común, distinguimos aquí entre permisos regiminales (extraordinarios) y permisos tratamentales (ordinarios).

Los permisos regiminales se concederán a los internos por tiempo imprescindible, en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge o persona con quien se halle unido por análoga relación de afectividad, hijos o hermanos, nacimiento del hijo así como por importantes y comprobados motivos. El tiempo imprescindible no se concreta, lo que determina que exista un cierto grado de discrecionalidad, que no puede convertirse en arbitrariedad.

El permiso regimental será concedido por el Director del EPM, tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos. Si bien, en caso de tratarse de penados de primer grado, es necesaria la autorización del Juez Togado Militar y, en caso de detenidos y presos, del órgano judicial de quien dependan, recabándose la autorización con urgencia.

Los permisos tratamentales se concenden a los penados que ostenten unas circunstancias determinadas, a saber: que hayan cumplido de manera efectiva la cuarta parte de su condena⁶⁵ que observen buena conducta y que no conste que puedan incurrir en quebrantamiento de condena, comisión de nuevos delitos o que el permiso pueda repercutir desfavorablemente para la adecuación del penado, a su regreso, al régimen penitenciario.

En todo caso cuando exista una negativa a un permiso de salida, debe motivarse y razonarse para el conocimiento de los criterios de la denegación del permiso y poder ser así recurrir ante los Tribunales⁶⁶.

Los permisos tratamentales se pueden conceder por un máximo de siete días con limitaciones de treinta y seis días para los clasificados en tercer grado y cuarenta y ocho días para los clasificados en segundo grado, salidas que conforme a la regla general, serán en dos semestres de cada año, concediéndose en cada uno de ellos, hasta dieciocho y veinticuatro días respectivamente.

5. Beneficios penitenciarios militares

5.1 El beneficio penitenciario del art 51 del RPM

Señala el art 51 del RPM que:

«Cumplidos los requisitos del artículo 52⁶⁷ de este Reglamento, salvo el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, el Director del establecimiento, respecto de los internos condenados por la jurisdicción militar, previo informe de los técnicos del Equipo de Observación y Tratamiento, podrá solicitar del Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria, la aplicación del apartados 2 y excepcionalmente del 3 del artículo 90 del Código Penal, que prevé la posibilidad de suspender la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a las dos tercera partes o la mitad de la condena. En este caso será necesario que en estos penados concurren durante el tiempo transcurrido de condena, las circunstancias o requisitos siguientes: a) Buena conducta habitual. b) Normal cumplimiento de los deberes y obligaciones del artículo 24 de este Reglamento. c) Participación con aprovechamiento en las actividades de tratamiento penitenciario para la

⁶⁵ Se computará la prisión preventiva o provisional.

⁶⁶ El art. 162 del RP dice que “cuando la Junta de Tratamiento acuerda denegar el permiso solicitado por el interno, se notificará a éste la decisión motivada con indicación expresa de su derecho a acudir en vía de queja al Juez de Vigilancia Penitenciaria”.

⁶⁷ A los penados que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena y reúnan los requisitos que se relacionan en el artículo 90.1 del Código Penal, se les suspenderá la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá libertad condicional. A los penados que hayan cumplido las dos terceras partes de la condena y reúnan los requisitos que se relacionan en el artículo 90.2 del Código Penal, se les podrá suspender la ejecución del resto de la pena de prisión y conceder la libertad condicional. Excepcionalmente, a los penados que hayan cumplido la mitad de la condena y reúnan los requisitos que se relacionan en el artículo 90.3 del Código Penal, se les podrá suspender la ejecución del resto de la pena de prisión y conceder la libertad condicional.

reeducación de los internos, en orden a su reinserción social, o en su caso, a su reincorporación a las Fuerzas Armadas».

Este beneficio se refiere a la posibilidad de adelantamiento para la libertad condicional pero en ningún caso para la libertad definitiva. Es necesario así que el interno se encuentre clasificado en tercer grado.

5.2 El indulto particular

No se contempla en el RPM y si en el art 206 del RP, por lo que se podría aplicar de forma subsidiaria al régimen penitenciario militar.

La Junta de Tratamiento, previa propuesta del equipo técnico, podrá solicitar del JVP la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias. Nada impide que dicha solicitud sea presentada directamente ante el juzgado, Ministerio de Justicia o Ministerio de Defensa dado el caso.

El indulto lo puede solicitar el propio penado o cualquier persona.

Para poder solicitar el indulto, el penado en un periodo continuo de dos años y en un grado extraordinario, debe ostentar buena conducta, desempeñar una actividad laboral normal y participar en las actividades de reeducación y reinserción social.

6. La libertad condicional

La encontramos en los artículos 52 a 56 del RPM. Como presupuesto básico se requiere el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena impuesta, además de los requisitos del art 90.1 del CP, entre los que encontramos que el penado se encuentre en tercer grado, que observe buena conducta y que haya satisfecho la responsabilidad derivada del delito.

Además, está condicionado a que no delinca. Con posibilidad de imponer las reglas de conducta del art 83 del CP.

Importancia notable es la configuración como una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena, lo que antes era una modalidad de cumplimiento o ejecución de la pena privativa de libertad, tras la reforma de la LO/2015.

7. Derecho a la información, quejas y recursos

Se ha de garantizar el derecho de los internos a elevar peticiones y recursos a las autoridades, facilitando el ejercicio de sus derechos civiles, en lo que se refiere a su tratamiento, al régimen del establecimiento y a cualquier otro tema derivado de la Administración Penitenciaria Militar. La forma adecuada será verbal o escrita dirigida al Director del Establecimiento, que resolverá o dará traslado a quien corresponda. La resolución será notificada por escrito al interesado.

En el ingreso en el Establecimiento Penitenciario, recibirán información por escrito, para formular peticiones, reclamaciones, quejas o recursos, y será facilitado por otro medio adecuado para quien no lo pudiese comprender.

8. El Juez Togado Militar Territorial en funciones de vigilancia penitenciaria

El Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria es fundamental en el sistema penitenciario, garante de los derechos de los internos y órgano integrante del poder judicial, independiente del ejecutivo, puede poner remedio a los abusos y desviaciones que puedan producirse en el sistema penitenciario.

La figura del Juez de Vigilancia aparece reflejada en numerosas ocasiones: arts 76 a 79 de la LOPG, art 61.4 de la LOCOJM, arts 356 a 358 de la LPM y, en el art 36 del RPM.

El Juez Militar integra el Poder Judicial y también el Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá las competencias y funciones que le atribuyen la Ley Orgánica General Penitenciaria y la Ley Orgánica Procesal Militar.

Los Juzgados Militares que integran en el Poder Judicial del Estado, son independientes, responsables y sometidos al imperio de la Ley, ningún órgano público puede ejercer sus funciones, no puede encargarse al personal que sirve en los órganos judiciales la realización de funciones públicas distintas de las propias del Poder Judicial, entre otras muchas.

En cambio, en el ámbito castrense sus miembros forman parte del Poder Judicial y son militares con empleo propio. Es decir, forman parte del Poder Judicial y del

Cuerpo Jurídico Militar. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en su art 26.4 los engloba como uno de los cuerpos comunes de las FFAA.

Así, los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en servicio activo, que formen parte del Cuerpo Jurídico Militar, que es un Cuerpo Común de las FFAA compaginan funciones de empleo militar y función jurisdiccional castrense. Si éstos solo pudieran ocupar funciones jurisdiccionales distintas a las castrenses, como pudiera ser formar parte del TS, pasarían a la situación de servicios especiales.

Las funciones atribuidas al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria son formular propuestas al Ministerio de Defensa, referentes a la organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, a la ordenación de la convivencia interior de los establecimientos, a la organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia médica y religiosas, en general, a las actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto. Las resoluciones adoptadas por los mismos deberán ser comunicadas a los interesados y autoridades que correspondan, para que éstas sean cumplidas.

VI. LA RELACIÓN JURÍDICO PENITENCIARIA MILITAR

El cumplimiento de una pena de prisión hace que surja una relación entre la Administración penitenciaria y el sujeto condenado, formando así una relación de especial sujeción.

Se inicia cuando el sujeto ingresa en un establecimiento penitenciario, *«el interno se incorpora a una comunidad que le vincula de forma especialmente estrecha»*⁶⁸.

Tras el ingreso, se produce un intercambio de derechos y deberes recíprocos, que permite reforzar el principio de legalidad en la ejecución y entender al interno no como un sujeto, sino como una persona que conserva sus derechos y libertades. Por lo que no estamos ante una relación de especial sujeción estricta, lo que posibilita una perspectiva más democrática y garantista centrada en el estatuto jurídico del interno.

⁶⁸ Artículo 5 del RP.

En lo que se refiere al ámbito castrense, la relación jurídica es más compleja; pues sobre el interno recae dos condiciones: interno y militar. Existe un impacto directo en la configuración de los militares que se encuentran cumpliendo una pena en un establecimiento penitenciario militar.

Recordamos que si la pena impuesta es superior a tres años de prisión, ésta conllevará la baja en las FFAA y por consiguiente la pérdida de condición de militar, con independencia de su origen, ya sea por el CP o por el CPM. Como consecuencia de ello, el penado *«deja de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las FFAA y a las leyes penales y disciplinarias militares»* (art 116.2 de la LCM). De igual forma producirá los mismo efectos cuando el militar renuncie voluntariamente a esta condición (art 116.1.a y 117 de la LCM).

Cuando el militar ha sido condenado por pena inferior a tres años se aplicará como accesoria la suspensión de empleo, con privación de funciones propias, y, conservando la condición de militar (art 18 del CPM en relación con los arts 112.1.a y 112.3 de la LCM). No se verá afectada la relación jurídica penitenciaria militar pero sí en lo que atañe a la condición de militar del interno en lo que trata sobre ascensos, pérdida de trienios, pérdida de destino, etc.

Hemos de distinguir igualmente la relación en función de si el interno cumple la pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario militar o en un centro ordinario por haber sido condenado el sujeto por un delito común que conlleva la baja en las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil; que conllevará los apuntes mencionados anteriormente.

Por un lado existe una línea de pensamiento que afirma la doble relación de especial sujeción. Así pues, una limitación de derechos fundamentales derivada de la relación jurídica penitenciaria que puede verse intensificada por la condición de militar del interno. Es el modelo que podría seguir la normativa penitenciaria militar.

Por otro lado, tomando como referencia el artículo 25.2 de la CE, es indiscutible que los derechos del interno queden limitados en base al contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. Los internos son personas, titulares de derechos fundamentales, que no deben perder por el ingreso en un establecimiento penitenciario.

El RPM lo reconoce parcialmente en su artículo 3.1:

«Los condenados a penas privativas de libertad, penas alternativas y los presos preventivos y detenidos gozarán de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y demás derechos que les conceda el resto del ordenamiento jurídico, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido de la resolución judicial, del fallo condenatorio y sus efectos».

La limitación de estos derechos debería tener un carácter excepcional y no constituir una premisa básica en el ámbito castrense.

La única limitación del derecho del interno será el derecho fundamental a la libertad (art 17 CE), aunque junto con la pena de prisión se impongan penas accesorias privativas de otros derechos (art 44 CP). Si bien, puede limitarse al interno para preservar la seguridad y orden dentro del establecimiento penitenciario y responder adecuadamente a la peligrosidad y agresividad de determinados internos (art 75.1 RP).

A tener en cuenta, en las penas privativas de libertad, podrá verse limitado el derecho a la intimidad del sujeto, ya que el interno convive con otros individuos y, en ocasiones, es necesario para la seguridad del centro.

VII. CONCLUSIONES

PRIMERA. Reconocimiento expreso en la Constitución

La jurisdicción militar existe gracias al reconocimiento expreso en el artículo 117.5 de la Constitución, y se encuentra limitada a conductas muy concretas, lo que se denomina el ámbito estrictamente castrense.

SEGUNDA. Bienes jurídicos militares

Las Fuerzas Armadas ostentan unas premisas propias características de la justicia militar que son la ejemplariedad, la disciplina, el rigor, y la jerarquía, que no podrán ser exigibles a la ciudadanía civil, y que, son necesarias para garantizar la eficacia en el ámbito castrense.

TERCERA. Código Penal y Código Penal Militar

El Código Penal Militar es independiente del Código Penal en lo que a delitos se refiere. Pues no existe una doble tipificación de delitos, ya que, con la última reforma se tipificaron únicamente delitos del ámbito castrense en el Código Penal Militar.

CUARTA. Condición de militar

Para el sujeto activo en los delitos del Código Penal Militar se requiere la condición de militar. Atendiendo a la duración de la pena privativa de libertad, el sujeto podrá perder dicha condición o, en su caso, suspenderla.

QUINTA. Finalidad del sistema penitenciario militar

La finalidad que se persigue en un Establecimiento Penitenciario Militar es la reeducación del penado en cuanto se prevé la posibilidad de reincorporación a las Fuerzas Armadas; o, la reinserción social para los detenidos o presos, que no se incorporarán al Ejército.

SEXTA. Derecho de defensa

Del mismo modo que en cualquier orden jurisdiccional es un derecho fundamental, para el ámbito castrense no es una excepción. Éste debe garantizarse en todo momento, incluso en situaciones producidas fuera del territorio español.

SÉPTIMA. Remuneración del trabajo

El trabajo en el Establecimiento Penitenciario Militar no será remunerado, a diferencia de lo que sucede en los demás Centros Penitenciarios. La argumentación se basa en tanto en cuanto, los internos, no dejan de ser militares, y podría distorsionar con el régimen militar que impide trabajar por cuenta propia a quien se encuentra en servicio activo. Además, el militar no necesita el carácter reintegrador y formativo que persigue el trabajo en prisión, pues éstos, en su vuelta a las Fuerzas Armadas volverán a sus labores propias del Ejército.

OCTAVA. Unidad jurisdiccional

La jurisdicción militar es una jurisdicción especial que imparte la tutela judicial efectiva en el ámbito castrense. Tiene sus normas propias y unos órganos judiciales especializados en la materia, que no dejan de estar sometidos a la Constitución y otras

normas superiores, por lo que al igual que los demás órdenes, ostenta una misión en un determinado ámbito de la justicia española, que bajo mi punto de vista, es necesaria.

NOVENA. Representación procesal

La representación del investigado implica tanto la asistencia técnica como la procesal, que, en el ámbito militar, puede realizarse mediante procurador o letrado.

DÉCIMA. Medidas cautelares sobre personas

Las medidas cautelares que se pueden adoptar sobre los sujetos son la citación, la detención, la prisión preventiva, la prisión incomunicada y la prisión atenuada.

UNDÉCIMA. Libertad provisional

La libertad provisional se acordará cuando no existan motivos que justifiquen la prisión o éstos se desvanezcan. Sin embargo, queda absolutamente prohibida en el ámbito castrense la libertad provisional bajo fianza.

DUODÉCIMA. Procedimientos en el ámbito castrense

Existen en el proceso penal militar tres procedimientos: Procedimiento preliminar (Diligencias previas), diligencias preparatorias y sumario ordinario. Cada uno de ellos está dirigido a unos delitos concretos o imposibles de determinar.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Leyes

Constitución Española de 1978

Declaración Universal de Derechos Humanos

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y Libertades Fundamentales

Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar

Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria

Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita

Ley 8/2014, de 4 de diciembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas

Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería

Ley 44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar

Real Decreto 112/2017, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario Militar

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario

Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Libros:

GARCÍA LOZANO, C., *“Jurisdicción militar: aspectos penales y disciplinarios”*. Lerko Print, Madrid, 2006.

JIMÉNEZ CASTAÑO, M., “*Trabajo Fin de Grado. Derecho Penal Militar*”, 2015.

LEÓN VILLALBA, F.J., “*Bases del Derecho Penal Militar Español*”, Iustel, Madrid, 2016.

LEÓN VILLALBA, F.J., “*Cuestiones sobre el derecho sancionador de la Guardia Civil (penales y disciplinarias)*”, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 2010.

LEÓN VILLALBA, F.J., “*Derecho penal y disciplinario militar*”, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 2006.

NÚÑEZ BARBERO, R., *Derecho Penal Militar y Derecho Penal Común*
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2785143.pdf> (internet)

SERRANO PATIÑO, J.V., “*El Derecho Penitenciario Militar Español*”, Edisofer, Madrid, 2016.

SERRANO PATIÑO, J.V., “*Sistema Penitenciario Militar Español*”, Ministerio del Interior, Madrid, 2013.

“*Revista de Estudios Penitenciarios*” (2017), nº 260. Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica. Gobierno de España.

“*Manual básico de tribunales y procedimientos militares*”. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Tribunal Militar Central. 2017.

“*Memento Derecho Procesal Penal*”. Lefebvre El Derecho. 2018.

IX. ANEXO JURISPRUDENCIAL

Tribunal Constitucional:

STC 179/2004, de 18 de octubre

STC 14/1996, de 29 de enero

STC 113/1995, de 6 de julio

STC 180/1995, de 19 de diciembre

STC 204/1994 de 11 de julio

STC 72/1994, de 3 de marzo

STC 60/1991, de 14 de marzo

STC 160/1987, de 27 de octubre

ATC 121/1984, de 29 de febrero

STC 21/1981 de 15 de junio

Tribunal Supremo:

STS, Sala 5ª, 4921/2014, de 1 de diciembre

STS, Sala 5ª, 2218/2014, de 28 de mayo

STS, Sala 5ª, 642/2014, de 11 de febrero

STS, Sala 5ª, 63/2013, de 9 de abril

STS, Sala 5ª, 8474/2012, de 17 de diciembre

STS, Sala 5ª, 702/2011, de 27 de enero

STS, Sala 5ª, 1822/2010, de 25 de marzo

STS, Sala 5ª, 1218/2009, de 18 de febrero

STS, Sala 5ª, 5330/2008, de 22 de septiembre

STS, Sala 5ª, 2169/2008, de 30 de abril

STS, Sala 5ª, 6293/2006, de 28 de septiembre

STS, Sala 5ª, 1320/2004, de 27 de febrero

STS, Sala 5ª, 268/2004, de 23 de enero

STS, Sala 5ª, 7218/2003, de 17 de noviembre

STS, Sala 5ª, 50/2003, de 14 de enero

STS, Sala 5ª, 2303/2002, de 1 de abril

STS, Sala 5ª, 4077/2001, de 17 de mayo